CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

COMISIÓN DE INTERIOR Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DE DON FRANCISCO MORENO FRANCO

Sesión celebrada el martes, 28 de marzo de 1995

ORDEN DEL DÍA:

- Comparecencia de la Secretaria de Estado de Interior, Excma. Sra. doña Margarita Robles Fernández, para responder a las siguientes preguntas:
- De don Francisco García Vico, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones del Gobierno respecto de la continuación con el desarrollo del Plan de despliegue operativo de la Guardia Civil, con indicación expresa de su incidencia en la provincia de Jaén. (Número de expediente 681/000059.)
- De doña Gemma Zabaleta Areta, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para corregir, paliar y prevenir la siniestralidad en los accidentes de tráfico ocasionada por el consumo del alcohol. (Número de expediente 681/000066.)
- De don Francisco Moreno Franco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las garantías que puede ofrecer el Gobierno sobre la efectividad del denominado Plan de Seguridad Ciudadana, en las barriadas periféricas de Sevilla. (Número de expediente 681/000071.)
- De don Francisco Moreno Franco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno respecto del sistema de transmisión de denuncias asistido por ordenador. (Número de expediente 681/000072.)
- De don Alfonso Garrido Ávila, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Justicia e Interior sobre la extensión del Plan de Libertad y Seguridad Ciudadana a otras localidades no consideradas como grandes ciudades. (Número de expediente 681/000073.)

- De don José María Escuin Monfort, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los criterios que sigue el Ministerio de Justicia e Interior para la selección, formación y asignación de destinos a los facultativos y técnicos del Cuerpo Nacional de Policía. (Número de expediente 681/000074.)
- De don Arturo Esteban Albert, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el número de miembros del Cuerpo Nacional de Policía que conducen irregularmente vehículos de la dotación policial, no estando en posesión del permiso de conducir de la clase B2 y las medidas previstas por el Ministerio de Justicia e Interior para evitar estas irregularidades. (Número de expediente 681/000077.)
- Y para informar, a petición del señor Petrizán Iriarte, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los sucesos ocurridos en la localidad de Elizondo durante la detención de un insumiso. (Número de expediente 713/000368.)
- Dictaminar el Proyecto de ley de las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (antes Proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado). (Número de expediente 621/000066.)
- Dictaminar el Proyecto de ley de contratos de las Administraciones Públicas. (Número de expediente 621/000069.)

Se abre la sesión a las once horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión. Ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia de los señores Senadores.

Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y de los señores Senadores presentes y representados.

El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el primer punto del orden del día, que es la comparecencia de la señora Secretaria de Estado, a quien agradecemos su presencia y damos la bienvenida en este momento, me gustaría, en nombre de la Mesa y estoy convencido de que en nombre de todos ustedes, desear el rápido restablecimiento y pronta incorporación a sus trabajos del Senador Ardaiz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de esta Comisión.

COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR PARA RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

- DE DON FRANCISCO GARCÍA VICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA CONTINUACIÓN CON EL DESARROLLO DEL PLAN DE DESPLIEGUE OPERATIVO DE LA GUARDIA CIVIL, CON INDICACIÓN EXPRESA DE SU INCIDENCIA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (681/000059.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el primer punto del orden del día y comenzamos con la pregunta del Senador García Vico, sobre previsiones del Gobierno respecto de la continuación con el desarrollo del Plan de despliegue operativo de la Guardia Civil, con indicación expresa de su incidencia en la provincia de Jaén.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Senador García Vico.

El señor GARCÍA VICO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Secretaria de Estado, durante el año 1993 se puso en marcha lo que se denominó el despliegue operativo de la Guardia Civil, cuyo objetivo fundamental era la concentración de fuerzas en municipios estratégicos atendiendo a unos criterios previamente diseñados por la Dirección General de la Guardia Civil y, por consiguiente, la supresión de cuarteles de la Guardia Civil en otros municipios. Durante 1993 se suprimieron en mi provincia siete cuarteles de la Guardia Civil, estando prevista la supresión de otros 13 en el citado año. Este plan fue paralizado, según las noticias que yo tengo, en la provincia de Jaén, con la consiguiente incertidumbre de los alcaldes y de los vecinos de aquellos municipios a los que afectaba este plan.

Sin entrar a discutir los criterios que en su día se barajaron para tomar las decisiones de supresión de cuarteles de la Guardia Civil, me gustaría que usted, como Secretaria de Estado, nos diera una amplia información sobre si el Gobierno tiene previsto continuar con este plan en el futuro. Por eso, con fecha 2 de diciembre de 1994 formulé la siguiente pregunta: ¿piensa continuar el Gobierno con el desarrollo del citado plan, con indicación expresa de su incidencia en la provincia de Jaén?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como su señoría ha indicado, el Gobierno tiene en marcha un plan, que lo que pretende es racionalizar la distribución de la Guardia Civil en el territorio nacional y hacerlo desde la perspectiva de un mayor

acercamiento al ciudadano, pero también desde una mayor eficacia en el servicio.

La filosofía de este plan era que en ocasiones no tenía mucho sentido tener determinados puestos abiertos, en los que la plantilla de la Guardia Civil sólo podía estar destinada a un servicio de puertas y, por tanto, no podían prestar servicios policiales. En ese sentido, lo que estamos haciendo es estudiar el plan detalladamente, sobre todo desde la perspectiva de conocer la realidad geográfica de las distintas provincias de España. Por lo tanto, se está reelaborando el estudio que en su momento se había hecho en la Dirección General de la Guardia Civil.

En resumen, el Gobierno sigue compartiendo plenamente la filosofía de racionalizar, de modernizar a la Guardia Civil y de que cada día preste un mejor servicio. En este momento la Dirección General, sobre la base de todo el material que tenía elaborado y acumulado, está estudiando —yo creo que estará listo para el mes de junio o julio— poder tener un plan más global, que permita decir qué puestos son necesarios y cuáles no lo son, pero siempre, como digo, desde una doble perspectiva: desde un acercamiento de la Guardia Civil y de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los ciudadanos y desde la racionalización y la prestación de un mejor servicio.

Efectivamente, como usted dice, en la provincia de Jaén hay 78 puestos de la Guardia Civil, se han cerrado siete y se está haciendo un estudio sobre el terreno para saber cuál es la mejor decisión que hay que tomar. Yo calculo, vuelvo a decir, que para el mes de junio ese plan estará bastante elaborado, por no decir ultimado.

El señor PRESIDENTE: Para un breve turno de réplica, tiene la palabra el Senador García Vico.

El señor GARCÍA VICO: Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente quiero agradecerle la información y pedirle que cuando se tome la decisión de llevar a cabo este nuevo diseño que se está elaborando se intente, en la medida de las posibilidades, informar a los alcaldes de los municipios afectados, para que no se produzcan hechos como los acontecidos con anterioridad, incluso con manifestaciones, recogida de firmas, etcétera, por no tener una información adecuada por parte del Gobierno Civil o de las respectivas comandancias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): No dude su señoría de que dentro de este plan que estamos reelaborando uno de los puntos fundamentales va a ser la consulta, sobre todo, a los gobernadores civiles y alcaldes, para, en función de los elementos de juicio que ellos nos aporten, tomar la mejor decisión en beneficio de la sociedad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

— DE DOÑA GEMMA ZABALETA ARETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA CORREGIR, PALIAR Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO OCASIONADA POR EL CONSUMO DE ALCOHOL. (681/000066.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Zabaleta Areta, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para corregir, paliar y prevenir la siniestralidad en los accidentes de tráfico ocasionada por el consumo del alcohol.

Tiene la palabra la Senadora Zabaleta.

La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.

La siniestralidad de los accidentes de tráfico es por sus aspectos cualitativos y cuantitativos un problema que preocupa a los españoles, sobre todo, cuando es ocasionado por el consumo excesivo de alcohol, del cual son víctimas los jóvenes españoles en los fines de semana o en épocas vacacionales. No es sólo un problema grave por el número de víctimas, sino también por la inseguridad que genera en todas las carreteras y en toda la circulación. La pregunta, por tanto, viene formulada de la siguiente manera: ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar este problema, sobre todo, en los aspectos de más interés, que son los preventivos? Creemos que se trata de prevenir este tipo de problemas, que también son de orden social, y no de sufrir después las consecuencias o de amortiguar las mismas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de Interior.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero decir, porque creo que esta Cámara es el lugar adecuado, que desde la aprobación del Plan de Seguridad Vial, en el que el Senado tuvo un papel tan importante, lo cual agradezco a todos los Senadores, la siniestralidad en España, sobre todo en los últimos cinco años, ha disminuido un 40 por ciento. Desde la Dirección General de Tráfico se ha hecho un esfuerzo muy importante, precisamente en el marco de ese programa aprobado por el Senado, que ha permitido unos resultados de los que todos nos debemos enorgullecer. (*El señor Vicepresidente, Córdina i Castillo, ocupa la Presidencia.*)

Es verdad que en este momento la causa mayor de siniestralidad, sobre todo entre los jóvenes, es la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los datos que a mí me transmite la Dirección General de Tráfico es que prácticamente un tercio de los accidentes con víctimas se produce por la influencia del alcohol y, sobre todo, insisto, en las personas jóvenes. Por eso, desde la Dirección General se ha trabajado desde una doble perspectiva, siempre

dentro del marco del Plan de Seguridad Vial que aprobó el Senado; por un lado, ha realizado unas campañas de prevención, de formación, sobre todo, de cara a los jóvenes, por medio de cursos, de publicidad, etcétera, y por otro lado, ha realizado una campaña importante que tiene un efecto disuasorio y preventivo: el incremento de los controles preventivos de alcoholemia en las zonas donde hay mayor influencia de establecimientos en los que se expenden bebidas alcohólicas, sobre todo, a personas jóvenes.

En concreto, puedo decir que en el año 1994 se han hecho un total de 931.514 controles de alcoholemia, frente a los 702.697 controles de alcoholemia realizados en el año 1993. En el año 1993 los resultados fueron un 4,81 por ciento de controles positivos, y en el año 1994 un 4,72 por ciento de controles positivos. La valoración que hemos hecho de estos controles preventivos ha sido muy positiva porque ha producido un efecto disuasorio que, efectivamente, hemos comprobado. Sin embargo, el problema de la ingesta de alcohol en la conducción sigue presente en nuestra sociedad. Por eso, aprovechando este marco que nos ofrece el Senado y la sensibilidad de esta Cámara en esta materia, me gustaría que entre todos, y dentro del Plan de Seguridad Vial, siguiéramos trabajando en esta línea.

El propio Ministerio de Justicia e Interior ha celebrado recientemente, hace un mes, unas jornadas que han tratado, bajo el título genérico de «Jornadas sobre el Ocio», sobre la ingesta de bebidas alcohólicas, sobre todo por la población más joven, y su incidencia en los accidentes de tráfico. Estamos realizando una campaña de sensibilización en las Comunidades Autónomas y en los ayuntamientos, pero la lucha contra la venta de alcohol es de todos. Por tanto, quiero hacer una llamada a esta Cámara para que se siga trabajando dentro del marco que la propia Cámara adoptó en el Plan de Seguridad Vial. Por mi parte, les aseguro que desde la Dirección General de Tráfico vamos a seguir realizando estos controles y que desde el Ministerio de Justicia e Interior vamos a impulsar cualquier tipo de iniciativa que pretenda atajar la influencia del alcohol en la conducción. Como ejemplo diré que en la ciudad de Barcelona —que es donde, como todo el mundo sabe, se están tramitando juicios rápidos relativos a las conducciones bajo la influencia de bebidas alcohólicas— ha disminuido de forma considerable la conducción bajo esa influencia por parte, sobre todo, de las personas más jóvenes. Estamos trabajando, por tanto, en la línea de la prevención y vamos a seguir haciéndolo.

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Gracias.

Tiene la palabra la Señora Zabaleta.

La señora ZABALETA ARETA: Gracias.

Quiero simplemente agradecerle a la señora Secretaria de Estado de Interior la información que nos ha facilitado y ofrecerle nuestra colaboración desde esta Cámara para prevenir y evitar al máximo posible las consecuencias desgraciadas que tendremos, sin ninguna duda, en fechas próximas.

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Muchas gracias.

— DE DON FRANCISCO MORENO FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS GARANTÍAS QUE PUEDE OFRECER EL GOBIERNO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL DENOMINADO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS BARRIADAS PERIFÉRICAS DE SEVILLA. (681/000071.)

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): La siguiente pregunta la formulará el Senador Franco Moreno, que tiene la palabra. Perdón, el Senador Moreno Franco.

El señor MORENO FRANCO: Muchas gracias por la rectificación, señor Presidente. (Risas.)

Señora Secretaria de Estado, todo cambio, naturalmente también aquellos que son para mejorar, genera esperanza, pero genera también pequeñas o grandes incertidumbres. Éste es el caso de la incidencia en las barriadas periféricas de Sevilla de la puesta en marcha del Plan de Seguridad Ciudadana. En algunas barriadas de la periferia particularmente castigadas por el tráfico de drogas, los dirigentes vecinales creen haber percibido, con ocasión de la puesta en marcha del plan, que la redistribución de los recursos humanos se ha reflejado en una menor presencia policial en esas barriadas. De aquí el sentido de la pregunta: ¿puede garantizar el Gobierno —estoy convencido de que sí— que se seguirán cubriendo esos puntos, dado que la alarma social es particularmente importante en esas circunstancias? Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Gracias.

Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, el plan de presencia policial, que yo creo que es un plan muy conocido, pretendía, como su propio nombre indica, un mayor acercamiento de la policía a los ciudadanos con una finalidad preventiva importante. Creemos que la seguridad tiene, aparte de un aspecto objetivo, el aspecto subjetivo de que la gente se sienta más segura. Lógicamente, cuando la población percibe que hay más policía en la calle el componente subjetivo de seguridad se incrementa.

En la ciudad de Sevilla se ha hecho un esfuerzo importante, como también se ha hecho en el resto de las otras diez ciudades donde el plan se ha puesto en marcha. Su señoría sabe que se ha pasado de un total de 384 funcionarios en toda la ciudad de Sevilla durante el año 1994, durante el período equivalente del uno de enero hasta finales de 1994, a los 518 que en este momento están en la ciudad de Sevilla precisamente destinados a ese plan. Se ha pasado tam-

bién de 20 vehículos «zeta» en el año 1994 a 38 vehículos «zeta» en el año 1995.

En general, puedo decir que en la ciudad de Sevilla, sin perjuicio de que luego valoremos lo que a su señoría le preocupa, los efectos del plan de presencia policial en estos dos meses y medio que lleva de ejecución son positivos, aunque tampoco hay que ser triunfalistas porque siempre hemos de trabajar en seguridad ciudadana para que las cosas funcionen lo mejor posible y nunca van a llegar a desaparecer los delitos, pero sí tenemos que intentar entre todos que los delitos disminuyan de forma considerable. Como digo, sin ser triunfalista, en este período de tiempo de aplicación del plan los robos con intimidación en la ciudad de Sevilla han disminuido, según la estadística que obra en mi poder, un 23 por ciento; los robos con fuerza en inmuebles, un 32 por ciento; las sustracciones en vehículos, un 11 por ciento, y las sustracciones de vehículos, el 20 por ciento. La disminución en el porcentaje de tirones ha sido de un 65 por ciento, que yo creo que es un número importante. Le puedo dar los datos concretos. En el período de enero a febrero de 1994 en la ciudad de Sevilla hubo 305 tirones; en igual período del año 1995 hubo 106. En cuanto a las sustancias estupefacientes, se ha producido en ese período de tiempo una disminución del 14 por ciento.

Es verdad que como cualquier plan necesita un tiempo de rodaje que permita aquilatar cuáles son las necesidades de las distintas zonas de las ciudades y, en función de ello, redistribuir los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en este caso, la policía. Estos dos meses y medio nos van a servir a todos, obviamente, para sacar conclusiones y para valorar en qué barrios o en qué zonas es más necesario incrementar la presencia policial.

Yo le puedo decir, según los datos que me facilita la Brigada de Policía Judicial de Sevilla, refiriéndonos al Polígono Norte y desde que está en marcha el Plan de presencia policial, que durante el mes de enero ha habido 12 detenidos autores de 13 robos con intimidación, dos detenidos por robo, otros cuatro por robo con procedimiento del tirón y otros 21 detenidos más por reclamaciones judiciales. En el mes de febrero ha habido en el Polígono Norte tres detenidos autores de tres robos con intimidación, dos detenidos por robo y otros dos detenidos más por robo con el procedimiento del tirón, más otros seis detenidos por reclamaciones judiciales. En el mes de marzo, también en el Polígono Norte, ha habido ocho detenidos autores de 10 robos con intimidación, un detenido por robo, un detenido por robo con el procedimiento del tirón, dos detenidos por reclamaciones judiciales y un detenido por sustracción en el interior de un coche. Es decir, aunque no he hecho la suma total, creo que el trabajo policial ha redundado en un número importante de detenidos.

Lo que sí puedo garantizar a su señoría y a toda la Comisión es que, a lo largo de todo el Plan de presencia policial, los propios jefes superiores de Policía tienen instrucciones para que, en función de la evolución del mismo, puedan ir colocando más funcionarios policiales en aquellas zonas en que ellos detecten que es necesaria una mayor presencia policial. Pero, insisto, creo que los datos que me

ha proporcionado la Jefatura Superior de Policía de Sevilla ponen de relieve que se ha realizado un trabajo intenso, especialmente desde la perspectiva de detener a quienes hayan cometido hechos delictivos.

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Muchas gracias.

¿Desea hacer uso de la palabra el Senador Moreno? (Denegación.)

— DE DON FRANCISCO MORENO FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DENUNCIAS ASISTIDO POR ORDENADOR. (681/000072.)

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): La siguiente pregunta la formula también el Senador Moreno Franco.

Puede hacer uso de la palabra.

El señor MORENO FRANCO: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a referirme ahora a otro capítulo nada grato, la incomodidad que conlleva la presentación de la denuncia después de haber sufrido la comisión de un delito determinado.

En algunos centros policiales se han instalado unos ordenadores para que en diversos supuestos, por ejemplo, sustracción de vehículos, sustracción de objetos de su interior, documentación, cartera, etcétera, es decir, cuando se trate de delitos que aun siendo menores son más usuales, se agilice la tramitación de la denuncia haciendo más llevadera la situación de la víctima.

La pregunta es muy sencilla: ¿Cómo va funcionando el sistema?

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias.

Efectivamente, como dice su señoría, desde la perspectiva de la Dirección General de la Policía lo que siempre ha preocupado es que hay un mayor acercamiento a los ciudadanos facilitándoles, en la medida de lo posible, la presentación de la denuncia después de haber sido víctimas de un hecho delictivo. Por esa razón, a finales de 1993 se decide la instalación en determinadas comisarías de lo que se denomina autoservicio de denuncias a través de un procedimiento automático muy similar al de los cajeros automáticos de los bancos. Además, en los lugares donde están instalados estos autoservicios de denuncias se establece la posibilidad de que éstas puedan formularse en otros idiomas, inglés, francés, alemán e italiano.

En estos momentos ya están instalados estos autoservicios en Madrid, concretamente en las Comisarías de los distritos de Chamartín, Chamberí y Centro. En Sevilla se han instalado en la Comisaría del distrito Centro y en Valencia en las Comisarías del distrito de Gran Vía. Se han instalado asimismo en las Comisarías locales de Benidorm y Gandía por ser lugares en los que, al haber mayor afluencia de turistas, pretendemos facilitar que extranjeros que en ocasiones tienen pocos días para estar en España puedan tener mayores comodidades a la hora de presentar sus denuncias. Por ejemplo, en la Comisaría de Chamartín, la primera en que se instaló este autoservicio en noviembre de 1993, se han tramitado desde esa fecha un total de 13.000 denuncias. La valoración que hace la propia Dirección General de la Policía y la que se hace en las encuestas realizadas por esa Dirección demuestran que los ciudadanos han recibido la instalación de este sistema de forma muy positiva. Y en esta línea de recepción positiva pondré el ejemplo de la Comisaría del distrito Centro de Sevilla, en la que se instaló este autoservicio el día 16 de diciembre de 1994, y donde hasta la fecha, del 16 al 31 de diciembre de ese año, ha habido 74 denuncias; del 1 al 31 de enero de 1995 ha habido 132, y del 1 al 12 de febrero se han producido 43. Eso quiere decir que los ciudadanos están utilizando este servicio y que, desde luego, el mismo genera una gran agilidad desde todos los puntos de vista.

En la medida de las disponibilidades económicas vamos a seguir trabajando para hacer extensivo este servicio, sobre todo en aquellas comisarías en que pueda haber una mayor afluencia de personas para denunciar hechos delictivos. Sin embargo, creo que la prioridad en nuestro trabajo no debe ser ésa sino la de que llegue a haber menos hechos delictivos. Lo cierto es que con el Plan de presencia policial, sin querer ser triunfalista sino siendo simplemente realista, en estos dos últimos meses y medio se ha conseguido una disminución importante, y sobre todo satisfactoria, en lo que al número de hechos delictivos cometidos se refiere.

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.

Tiene la palabra el Senador Moreno Franco.

El señor MORENO FRANCO: Señor Presidente, con toda brevedad quiero darle las gracias a la señora Secretaria de Estado, aprovechando la ocasión para trasladarle mi felicitación personal, y estoy convencido que la de los sevillanos en su conjunto, por el esfuerzo que han realizado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con ocasión de la celebración de la boda de la Infanta doña Elena. Trasládeles también a ellos esta felicitación porque lo han hecho magníficamente bien.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Tiene la palabra la Señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Desde luego, estaré encantada

de trasladar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su felicitación, la felicitación de esta Comisión. Creo que el trabajo bien hecho —lo hemos dicho en muchas ocasiones desde el Ministerio— siempre se debe a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Muchas gracias.

— DE DON ALFONSO GARRIDO ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR SOBRE LA EXTENSIÓN DEL PLAN DE LIBERTAD Y SEGURIDAD CIUDADANA A OTRAS LOCALIDADES NO CONSIDERADAS COMO GRANDES CIUDADES. (681/00073).

El señor VICEPRESIDENTE (Codina i Castillo): Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Garrido.

El señor GARRIDO ÁVILA: Gracias señor Presidente.

Señora Secretaria de Estado, en su anterior respuesta le señalaba al Senador Moreno —decía usted que sin querer ser triunfalista— que empezaban a notarse los afortunadamente positivos efectos del Plan de seguridad ciudadana, del Plan de presencia policial en la calle, y que las curvas de delincuencia, afortunadamente, se quiebran y empiezan a bajar. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia*).

Eso que ya ha empezado a producirse en el conjunto de esas once ciudades en que inicialmente se ha implantado el Plan genera, lógicamente, que los ciudadanos perciban de cerca y día a día la necesidad de la presencia policial; es decir, ello despierta las expectativas de quienes, no teniendo todavía dicho Plan, empiezan a preguntarse cuándo les tocará a ellos puesto que ven la bondad del sistema y asimismo que las cosas están mejorando en otros sitios. Este es el sentido de mi pregunta, señora Secretaria de Estado: ¿Hay alguna previsión ya barajada por el Ministerio de Justicia e Interior en cuanto a la extensión del Plan de presencia policial más allá de estas once ciudades, bien a otras capitales de provincia, bien a otras ciudades que, aun no siéndolo, pueden tener el interés policial suficiente como para que también se establezca en ellas este nuevo Plan?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Efectivamente, como decía en mi intervención anterior, en materia relativa a seguridad ciudadana nunca vamos a ser triunfalistas —al menos desde mi Secretaría de Estado— ya que creo que siempre hay que trabajar más para conseguir mejores resultados. Además, considero que no es bueno que nadie utilice de un modo partidista todo lo que se refiere a seguridad ciudadana.

Lo que sí es cierto —y no es una manifestación del Ministerio de Justicia e Interior, sino la perspectiva de los ciudadanos, que es la que a mí me importa— es que la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España hacía el otro día una valoración muy positiva del Plan de seguridad —apareció en los medios de comunicación recogida por la Agencia Europa Press—, en la que se decía que había habido en estas once ciudades una disminución del 19 por ciento de los delitos. También solicitaban los propios ciudadanos que se extendiera el Plan de presencia policial a otras ciudades. Eso nos demuestra efectivamente que los ciudadanos valoran positivamente este Plan puesto que ven más cerca de ellos a la Policía, lo que creo es muy importante desde una perspectiva de servicio público. Por otra parte, todo esto hace que desde la Secretaría de Interior sigamos avanzando en la línea en que consideramos debemos trabajar, pero trabajar entre todos. Muchas veces he dicho que la seguridad ciudadana no es sólo una obligación muy importante del Gobierno central, sino que también lo es en lo que a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos se refiere. Creo que eso lo han entendido muy bien determinados ayuntamientos, gobernados incluso por el Partido Popular, que están colaborando muy bien en este Plan de presencia policial como puede ser, por ejemplo, el de Valencia y el propio Ayuntamiento de Madrid. Esa es una perspectiva de Estado que tengo que agradecer.

En esa línea, y siempre contando con la colaboración de Comunidades Autónomas y ayuntamientos, estamos avanzando ya con los gobernadores civiles y, sobre todo, con asociaciones de vecinos, en la posibilidad de ampliar este Plan a las ciudades de Almería, Cádiz, Córdoba, Lérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Toledo. La semana que viene celebraré una reunión con los gobernadores civiles de estas ciudades, y pretendo celebrar otra con los concejales de sus ayuntamientos. Espero poder contar con la misma colaboración que me prestaron los concejales de las otras once ciudades —insisto, sin distinción de partido político—, para que entre todos podamos ampliar este Plan o, cuando menos, redistribuyamos la presencia policial a estas ocho ciudades que acabo de mencionar.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el Senador Garrido.

El señor GARRIDO ÁVILA: Muchas gracias.

Me satisface plenamente esta respuesta por cuanto que, afortunadamente, esas otras ciudades verán también mejorada su seguridad. Como bien decía con su matización la señora Secretaria de Estado, que nadie quiera ver color político en ello ya que si no no estarían incluidos en él todos esos ayuntamientos.

Muchas gracias.

— DE DON JOSÉ MARÍA ESCUÍN MONFORT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LOS CRITERIOS QUE SIGUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR PARA LA SELECCIÓN,

FORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE DESTINOS A LOS FACULTATIVOS Y TÉCNICOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (681/000074.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos a la pregunta del Senador Escuin, relativa a los criterios que sigue el Ministerio de Justicia e Interior para la selección, formación y asignación de determinados destinos del Cuerpo Nacional de Policía.

Tiene la palabra el Senador Escuin.

El señor ESCUÍN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Secretaria de Estado, formulamos esta pregunta porque, según información que hemos recibido, el desarrollo normativo posterior de las plazas de facultativos y técnicos previstas en la Ley Orgánica 2/1986 como necesarias para la cobertura y apoyo de la función policial —a desempeñar entre funcionarios de carrera con títulos de los grados A y B—, permite la duda sobre si se pretende dotar al Cuerpo Nacional de Policía de los necesarios y más idóneos técnicos y facultativos para el apoyo y cobertura de las actividades policiales que exigen conocimientos especiales que no son los generales o habituales requeridos a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

El proceso de selección de estas plazas de facultativos y técnicos por el sistema de concurso ofrece una serie de inconcreciones, tanto en el baremo de méritos, en los que a veces predominan criterios subjetivos de valoración más que los estrictamente objetivos, como en la catalogación o relación de puestos de trabajo, niveles que en algunas convocatorias —como en la última resolución— no figuran, con la lógica repercusión que ello puede tener en el destino. Esto convierte esta selección en la más pura discrecionalidad, superados los mínimos exigibles de título y funcionamiento, y permite alterar, si cabe, la finalidad prevista en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de propiciar la más adecuada colaboración y ayuda por facultativos y técnicos, para convertirse en un medio, digamos adulterado, de ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía y de percibir mayores ingresos por determinados funcionarios, que pueden resultar favorecidos por este sistema de concurso tan discrecional. Además, en la realización de los cursos de especialización posterior en modo alguno se cumplen los trámites y no tiene ninguna trascendencia a efectos de la adjudicación y la mejor dotación de esta selección.

Prueba también de la crítica que hacemos es que en la última asignación de puestos de trabajo concurren para determinados puestos, no solamente los comisarios o inspectores, sino también facultativos y técnicos, y en algunas ocasiones puestos que son exclusivamente para miembros del Cuerpo Nacional de Policía en las escalas superiores ejecutiva o de subinspección están cubiertos por facultativos. Esto demuestra la psicosis que hemos detectado acerca de que este procedimiento de asignación de plazas de facultativos y técnicos consiste más en un medio para que ingresen en el Cuerpo Nacional de Policía perso-

nas que quizá no lo podrían conseguir por otro procedimiento, lo que, en definitiva, puede repercutir en la mejor calidad de los técnicos y facultativos del Cuerpo Nacional de Policía, sin que entre a valorar el trabajo que ellos puedan realizar posteriormente, ya que, insisto, me refiero a la forma de ingresar en el Cuerpo de técnicos y facultativos.

Por tanto, señora Secretaria de Estado, queremos que nos dé una información exhaustiva sobre estas plazas que prevé la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estaremos muy atentos a su contestación y a las explicaciones que nos pueda facilitar, pero no haremos ninguna réplica. Valoraremos su contestación y, en su momento, actuaremos en consecuencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, desde la Dirección General de la Policía se comparte la preocupación que su señoría ha manifestado sobre la necesidad, y no sólo en relación con los técnicos y facultativos, de que las personas que ingresen en el Cuerpo Nacional de Policía sean mejores cada día. Porque, finalmente, lo que la sociedad se juega es mucho: un mejor servicio público, una mejor prestación de algo tan importante como la seguridad, que es lo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que prestar a todos los ciudadanos. Por tanto, es una prioridad fundamental de la Secretaría de Estado de Interior que en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entren los mejores y tengan la mejor formación.

Estoy de acuerdo con su señoría en que el papel de los técnicos y facultativos es muy importante. Así se recogió en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y también en distintos decretos; sobre todo en el que, como bien sabe su señoría, regula el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía con carácter general. Usted sabe perfectamente que todo lo relativo al Cuerpo de Técnicos y Facultativos está regulado, como bien decía, en la Orden de 10 de julio de 1989, que establece el procedimiento de acceso a dicho Cuerpo y se basa en dos puntos fundamentales: el concurso y el curso de especialización. En esa Orden se establece un baremo para el concurso que, en teoría, creo que pretende ser lo más objetivo posible. Junto con el concurso también se prevé un curso de especialización que, tal como figura en la Orden, tendrá una duración de dos meses, con un primer ciclo más de carácter teórico y un segundo ciclo más de carácter práctico. Lo que puedo asegurarle es que únicamente nos interesa que entren los mejores, que se está trabajando desde esa perspectiva, y que ésas son las instrucciones que tiene la Dirección General de la Policía. Esa es la única filosofía que tenemos, que también hace referencia a los técnicos y facultativos. Por eso, es verdad que el concurso es importante, pero quizá tanto como éste lo sean para mí los cursos de especialización, porque ésta de-

muestra que esas personas se están poniendo al día sobre el trabajo que van a realizar.

Los datos de que dispongo de la Dirección General de la Policía indican que los criterios que se están siguiendo son de absoluta objetividad y, desde luego, las instrucciones que yo tengo son que eso sea así. Por tanto, sólo le pido a su señoría que si en algún caso concreto valora que no se ha producido esa objetividad, me lo haga llegar, porque tomaremos las medidas oportunas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Quiere su señoría hacer uso del turno de réplica? (Pausa.)

Muchas gracias.

— DE DON ARTURO ESTEBAN ALBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE EL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA QUE CONDUCEN IRREGULARMENTE VEHÍCULOS DE LA DOTACIÓN POLICIAL, NO ESTANDO EN POSESIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR DE LA CLASE B2 Y LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR PARA EVITAR ESTAS IRREGULARIDADES. (681/000077.)

El señor PRESIDENTE: Para la formulación de la siguiente pregunta, tiene la palabra el Senador Esteban.

El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Secretaria de Estado, sean mis primeras palabras para agradecerle su presencia en esta Comisión.

Con el ánimo de no extenderme mucho en lo que se aventura como una sesión maratoniada, voy a exponerle con mucha brevedad el motivo de la preocupación de mi Grupo y la mía personal.

En reiteradas ocasiones, el Sindicato de la Policía ha venido denunciando que, a pesar de que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que conducen vehículos «zeta», o de otro tipo, destinados a ese Cuerpo y al servicio público que deben desempeñar deben estar en posesión del permiso de conducir de la clase B2, una gran parte de quienes conducen dichos vehículos no están en posesión de ese carné de conducir sino, por el contrario, del que habitualmente tenemos casi todos los españoles, como es el de segunda, o B1. Por tanto, es necesario desmentir esta denuncia del Sindicato de la Policía, o asumirla e, inmediatamente, establecer los medios necesarios para evitar esa situación. Porque, de ser cierta, señora Secretaria de Estado, no sólo estaríamos ante una situación absolutamente irregular que no le sería permitida a ningún español, sino que probablemente se empieza a tener la sensación en este país de que el Ministerio de Justicia e Interior no tiene soluciones en estos momentos a los problemas de España en un tema menor como éste.

Desearía que en su contestación desmintiera esta declaración, pero si eso no fuera así, mi pregunta es qué medidas urgentes va a adoptar el Ministerio de Justicia e Interior para solucionar esa situación tan anómala.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias, señor Presidente.

Señoría, tengo que corregirle, porque no creo que los ciudadanos piensen que el Ministerio de Justicia e Interior no tiene soluciones a los problemas. Precisamente, antes me he referido al concepto que tienen los ciudadanos —porque, insisto, no me gusta ponerlo en mi boca— sobre la presencia policial, sobre un tema tan importante como la seguridad ciudadana. Insisto en que en todas estas materias creo que hay un trabajo positivo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero también del Ministerio de Justicia e Interior. Algo tan importante como la seguridad ciudadana ha pasado de ser la segunda preocupación de los españoles a estar en el quinto lugar; eso quiere decir que el Ministerio de Justicia e Interior algo hace también. Por tanto, me permitirá que no pueda aceptar que el Ministerio de Justicia e Interior no da respuesta a los problemas de los ciudadanos.

En segundo lugar, tengo que decirle con absoluta contundencia que eso que usted dice que le ha planteado no sé qué sindicato, según me dice la Dirección General de la Policía, no es verdad, y lo digo con absoluta contundencia. Desde que se hizo la modificación del Código de Circulación y se impuso la obligación de utilizar el permiso de conducir B2, ésa ha sido también una prioridad de la Dirección General de la Policía; tanto que, precisamente, en el centro de formación y en los cursos de formación para ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía las personas que no tienen permiso de circulación B2 están saliendo con él. Por lo tanto, yo puedo decirle que el problema que usted plantea no existe. Es más, yo suelo reunirme, porque creo que es mi obligación, y además es también un placer hacerlo, con los sindicatos de los policías, que tienen obligación de presentar los problemas porque entre todos debemos conseguir que la policía sea mejor para que preste un mejor servicio, y puedo decirle que en los diez meses que yo llevo al frente de la Secretaría de Estado de Interior, reuniéndome con una gran periodicidad con los sindicatos, ninguno de ellos me ha planteado nunca ese problema. Me han planteado otros, al ser yo la máxima responsable, pero no ése. Y le puedo asegurar que cuando los sindicatos policiales, como cualquier persona, me plantean un problema, yo hago lo que está en mi mano para resolverlo. Pero insisto en que, en diez meses, ni de palabra ni por escrito, ningún sindicato policial me ha planteado ese problema, por lo que yo tengo que pensar que no existe.

Repito lo que le dije al anterior interviniente: si usted conoce algún caso concreto y puntual, porque sólo puede ser un caso concreto y puntual, le pido que nos lo hagan llegar y se tomarán las medidas oportunas.

El señor PRESIDENTE: El señor Esteban tiene la palabra.

El señor ESTEBAN ALBERT: Intervengo con brevedad, señor Presidente, para decir que me tranquiliza, en parte, la contestación de la Secretaria de Estado, porque parece ser que el problema no ha llegado, al menos, a su mesa de despacho, pero no tenga la menor duda de que, si después de lo que usted ha dicho aquí, me llegara una denuncia, la próxima vez haré una interpelación al señor Ministro del Interior en el Pleno de la Cámara. Eso es evidente, porque sería bastante decepcionante para los responsables de la soberanía nacional que a la Secretaría de Estado no hubiera llegado una denuncia de ese calibre.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.

La SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Le digo que a mi mesa llegan papeles, pero además yo tengo la manía, buena o mala, no lo sé, de reunirme mucho con la gente. Y como los papeles en ocasiones no llegan o pueden pasar cosas, lo que sí puedo decirle es que yo me reúno con la gente y hablo mucho, que creo que es la mejor manera de conocer los problemas de verdad, y de las reuniones que yo tengo con los sindicatos de policía —que insisto que son frecuentes— en las que plantean problemas, como es su obligación, ése, a mí, personalmente, nunca me lo ha planteado nadie.

No obstante, para que su señoría se quede tranquilo, en la próxima reunión que yo tenga con los sindicatos —y le pediría que cuando terminemos me diga qué sindicato en concreto es el que ha manifestado esa queja—, hablaré con ellos a ver si es verdad que han detectado ese problema.

— INFORMACIÓN SOBRE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA LOCALIDAD DE ELIZONDO DURANTE LA DETENCIÓN DE UN INSUMISO. (713/000368).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, voy a dar la palabra al Senador Petrizán Iriarte, para que nos exponga su petición de comparecencia del Ministro para explicar los sucesos ocurridos en la localidad de Elizondo durante la detención de un insumiso.

Tiene la palabra el senador Petrizán.

El señor PETRIZÁN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, nuevamente, por darnos la oportunidad de que esta petición de comparecencia se realice en la Comisión y, por supuesto, a la señora Secretaria de Estado.

Tengo que confesar, en primer lugar, que a mí me produce un cierto cansancio tener que intervenir, no porque lo haya hecho muchas veces, sino porque a algunas personas

no nos gusta ser noticia por lo que solemos ser, pero desafortunadamente así sucede. También tengo que decir que no puedo hacer ninguna lisonja como las que aquí se han hecho anteriormente, sino que mi intervención va a ser de otro tono.

Decía lo del cansancio porque, desafortunadamente, en la Comunidad Foral Navarra acostumbrados a ser exóticos en algunas cosas, y lo somos, por ejemplo, en el número de insumidos que están sufriendo en este momento penas de prisión, que pasan de los 100, como seguramente usted conoce. En relación con esto, ya he insistido en varias ocasiones en esta Cámara en que nosotros nos sentimos como conejillos de Indias, porque, por poner sólo un ejemplo, en Cataluña hay 3.000 insumidos de los cuales ni uno sólo ha sido juzgado ni condenado a penas de prisión de 2 años, 4 meses y un día, como sucede en Navarra prácticamente todas las semanas o, como mínimo, mensualmente. Además de esta constatación, le diré también que, desafortunadamente, en Pamplona, o en el resto de la Comunidad, hay un permanente goteo de sucesos que tienen relación con su Secretaría de Estado, con Interior, y sólo en el último año nos encontramos, por ejemplo, con que un anciano murió por inhalación de gases de un bote de humo que penetró en su casa durante unos disturbios, y nadie se dio cuenta; a un chico de 14 años que volvía de la catequesis parroquial le tuvieron que vaciar un ojo por un pelotazo de goza, o la detención, hace 15 ó 20 días, un mes ya, de unos insumidos que hacían el plante para que fueran calificados de segundo grado, y que se realizó también con innecesaria violencia porque, de hecho, los insumidos estaban sentados en la calle.

Y nos encontramos también con el suceso motivo de esta petición de comparecencia. En Elizondo, una localidad del norte de Navarra, se fue a detener, al parecer, a un insumido para que cumpliera una condena firme de 2 años, 4 meses y un día; al parecer, esta persona huyó y, según la versión policial, se produjo un forcejeo, que él negó en declaración al juez, y se produjo un disparo que afectó a la espalda de esta persona. Tengo que decir que el detenido declara que a él le parece que el disparo ha sido fortuito, es decir, que no es verdad que haya pensado que había un intencionalidad, sino que al guardia civil se le disparó su arma en el momento en que le iba a colocar las esposas. Eso es lo que, al parecer, dijo en su declaración ante el juez. Lo que yo pido, si es posible, es que no se agraven más los problemas que estamos teniendo con la insumisión, con ese número de jóvenes encarcelados en Navarra. Y si no me contradice, no tengo más remedio que decir que la actuación de los guardias civiles que fueron a detener a este insumido me parece desproporcionada, intimidatoria, negligente y que pudo causar daños irreparables. Y con ello no hago más que adherirme al comunicado del Ayuntamiento de Baztán, de donde es este insumido, por unanimidad de todas las fuerzas políticas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias, señor Presidente.

En la primera parte de su intervención ha expuesto lo que usted considera que es un problema, y esto es algo en lo que el Ministerio de Justicia e Interior y la Secretaría de Estado de Interior no podemos entrar. Usted hablaba de que en Navarra, a diferencia de Cataluña y otras Comunidades, hay un número muy considerable de personas sentenciadas por el delito de negativa a la prestación del Servicio Militar, y a eso tengo que decirle que el hecho de que haya resoluciones judiciales es algo que no entra en el marco de competencias del Ministerio de Justicia e Interior. El Ministerio de Justicia e Interior, como ha hecho siempre, y como tenemos que hacer todos, no puede más que respetar la independencia de los jueces, y cuando éstos nos piden el concurso para ejecutar las resoluciones judiciales, lo que tenemos que hacer es ejecutarlas. Y, efectivamente, como su señoría ha dicho muy bien, en este caso concreto se iba a efectuar una detención, en cumplimiento de una orden del juez que pedía la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta por ese delito que, aunque en este momento el Código Penal así lo establezca, conlleva una pena de 2 años, 4 meses y un día de prisión menor. Obviamente, en el nuevo Código Penal la sanción será otra, pero, como digo, lo que hacía en este caso la Guardia Civil del puesto de Elizondo era limitarse a cumplir una orden de un juzgado de lo Penal de Pamplona, que había impuesto esa pena privativa de libertad.

Como bien ha dicho su señoría, la propia persona detenida ha dicho que el hecho fue fortuito. Es un hecho que yo lamento profundamente, pero que ha sido un caso de mala suerte en el que una persona ha resultado herida, y creo que en tales casos todos tenemos que lamentarlo, sin más. Yo creo que el guardia civil que procedió a la detención tomó todas las medidas necesarias para que ese resultado no se produjera, aunque, desgraciadamente, se produjo como consecuencia de un forcejeo por una acción de resistencia a la persona que iba a ser detenida y que, además, se había dado a la fuga, y en ese forcejeo esa persona dio un manotazo que hizo que se disparara el arma del guardia civil.

Yo no puedo más que lamentar que se produzcan resultados como estos. Puedo decir que se ha hecho una investigación que se ordenó inmediatamente en el seno de la Guardia Civil, y se ha llegado a la misma conclusión que exponía su señoría. Usted ha dicho que el hecho fue fortuito, y yo no voy a entrar en el calificativo porque creo que no me corresponde a mí, pero lo cierto es que parece que se produjo como consecuencia de una acción de reacción de la persona que iba a ser detenida, y eso tendrá que valorarlo el juez de instrucción, que es el que está siguiendo el conocimiento de esos hechos. Por lo demás, el detenido tenía un esguince en el tobillo que se produjo como consecuencia de haber saltado por la ventana porque lo que trataba era de eludir la acción de la justicia.

Desde la perspectiva de la Secretaría de Estado de Interior, aparte de lamentar el resultado producido, que yo creo que todos debemos lamentar, debo decir que la Guardia Civil «motu proprio» practicó inmediatamente esa investigación. Del contenido de la misma se ha llegado a la con-

clusión de que se produjo el disparo como consecuencia de una reacción del detenido. En cualquier caso, el Juzgado de Instrucción de Pamplona está estudiando los hechos y estamos a la resolución que éste definitivamente tome. Pero lo que sí es cierto es que, en este caso, la Guardia Civil se limitó a ejecutar una orden de un juzgado de lo Penal que había dictado previamente una sentencia cumpliendo la ley. Obviamente, a ninguno de nosotros corresponde valorar el contenido de esta sentencia, sin perjuicio, como digo, de que en el marco del nuevo Código penal la insumisión pueda tener el tratamiento que los representantes del pueblo español en el Congreso de los Diputados y en el Senado quieran que tenga.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.

Señor Petrizán, si su señoría desea intervenir, debo advertirle que lo haga con toda brevedad, porque es intención de la Presidencia proceder a un turno de portavoces para que aquellos Grupos Parlamentarios que quieran fijar su posición puedan hacerlo.

Entramos en el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Petrizán Iriarte.

El señor PETRIZÁN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Secretaria de Estado, mi intención antes era pedirle que desde Interior no se agravase el problema. Yo no estuve presente en esta detención, pero sí estuve presente en los sucesos de Pamplona, no hace un mes, en el último plante, como lo llaman los insumisos, para que los calificaran en segundo grado. La detención de estas personas se produjo violentamente sin ninguna necesidad.

En el caso que nos ocupa en este momento sucede lo mismo. No hay por qué agravar el problema. Ni una sola de estas personas condenadas ha huido. Me entrevisté con la persona que tenía un esguince de tobillo —esguince que necesitó tratamiento médico—, y esta persona declaraba que sólo un guardia civil —la Guardia Civil declara que fueron dos personas— se le acercó. Dice esta persona que él en ese momento ya estaba absoluta y totalmente quieto porque estaba encañonado con un arma. Declara también que el disparo fue absolutamente fortuito. Y yo no tengo más remedio que creerle. Y le creo a él y no me creo un forcejeo de una persona lesionada. Y, desde luego, es fantástico lo del manotazo y que el tiro entre por la espalda, es como aquello de que los manifestantes volaban en los tiros al aire. Porqué, ¿cómo se da un manotazo exactamente si el orificio de entrada está a la altura del omoplato? A mí lo que me gustaría es que se diese una versión normal, creíble; que de depuraran las responsabilidades y que hubiera un compromiso desde la Secretaría de Estado de Interior de hacerlo.

A nosotros nos gustaría —y a mí en concreto— que, aunque algunas veces se pueda dudar de la falta de valoración que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado en mi Comunidad, la tuvieran mejor. Yo sé que la tienen mala porque conozco las encuestas; pero con este

tipo de hechos en lo único que hacemos es, precisamente, ahondar en un agujero. Y este tipo de declaraciones como las que usted ha hecho, de un manotazo, de un forcejeo, cuando esta persona declara a favor de la Guardia Civil diciendo que cree que fue fortuito, que estaba parado y al apoyar la mano en la espalda para que le pusieran las esposas fue cuando se disparó el tiro, pues me parece una versión correcta, normal y, desde luego, seguramente la cierta. Cualquier otra versión exculpatoria de que existió un forcejeo, no me lo creo. En este sentido, le pediría, para bien de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en mi Comunidad y para que la valoración sea normalizada, porque formamos parte de un Estado, que si hay que hacer unas detenciones en función de un principio de legalidad se hagan con toda la normalidad que se pueda. Yo he intervenido ante el Delegado del Gobierno de mi Comunidad diciéndole cómo estaba este asunto. He intervenido también en alguna otra ocasión, pero lo que desde luego no van a lograr en absoluto es una valoración normalizada cuando de repente se lanzan versiones que yo le puedo asegurar que no hay ni una sola persona en Elizondo, en Baztán, en la localidad que se produjeron estos hechos, que se las crea. Ni una sola.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.

Creo, señoría, que usted ha incurrido en una contradicción y, además, se ha dado cuenta de ello. Usted dice que ningún insumiso ha huido. Pues mire, señoría, éste precisamente huía. Y eso me parece que es fundamental decirlo. Y el esguince en el tobillo se lo produjo porque este señor saltó por una ventana mientras la Guardia Civil estaba abajo y fue corriendo durante un largo período de tiempo. Efectivamente, usted está en su derecho de creer a la persona con la que ha hablado. Pero ya he dicho que hay un juzgado de instrucción que está tramitando los hechos y que finalmente será el que pueda dilucidar posibles responsabilidades. Pero no me diga usted que ningún insumiso ha huido cuando éste lo ha hecho. Efectivamente, él prefiere decir que ha sido fortuito porque no va reconocer que él ha huido y además lo ha hecho con un esguince después de que toda la familia lo protegía, cosa que me parece razonable —desde el punto de vista personal, lo entiendo todo—; pero un comportamiento personal, cosa que yo puedo entender, ha de ser coherente con la decisión que uno toma, y no se puede luego dejar de asumir responsabilidades.

Por lo tanto, lamentando el resultado producido, no tengo más remedio que decirle que en este caso, efectivamente, lo que pretendía esta persona era huir; salió y se dio a la fuga.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Galindo.

El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.

Bienvenida, señora Secretaria de Estado.

Únicamente intervengo en función de la enorme sensibilidad que ha mostrado su señoría respecto de la seguridad de este país y del conjunto de todas las ciudades. No obstante, aceptando esa sensibilidad, preocupación y medios que usted ha expresado para el conjunto de las ciudades de este país, en Canarias tenemos un tremendo problema, quizá no de seguridad, pero si su señoría y su Ministerio son sensibles, el tema del turismo es en Canarias una preocupación que no se da en el resto del Estado, porque hay que tener en cuenta que el 75 u 80 por ciento de la población activa en el archipiélago canario dependen de él, y los incidentes o los delitos que se producen fundamentalmente en las capitales de provincia del archipiélago van orientadas a estos visitantes.

No obstante, repito, aprovechando esa sensibilidad y esa preocupación que usted ha mostrado, sin hacerle ninguna interpelación, aprovecho el momento coyuntural para agradecerle, en nombre de nuestro Grupo, su presencia y su gran preocupación por el tema de la seguridad en este país.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Antes de continuar con el turno de portavoces, agradecería a todas sus señorías que le ahorrraran a la Presidencia la obligación de llamarles a la cuestión. En cualquier caso, les agradezco sus intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Sanz.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente.

Con suma brevedad, deseo agradecer a la Secretaria de Estado su presencia y las explicaciones que de modo tan pormenorizado se nos han dado. Pero, al mismo tiempo, quería señalar que se ha eludido un problema que nos afecta a todos, que es el problema de fondo, y en el que yo creo que el Ministerio de Justicia e Interior tiene una responsabilidad determinada. Insisto en que es un problema de todos. Incluso en las Cámaras estamos tratando ahora la reforma del Código Penal, y será el momento de abordar más específicamente la cuestión. Pero yo me pregunto: ante un supuesto clave, de fondo, como es la despenalización de la insumisión, ¿no existen métodos, no existen medios, como se han puesto en la práctica en otros supuestos como el de la prisión preventiva, para acabar de una vez por todas con este problema? A nosotros nos parece realmente absurdo que haya gente que pene, que sufra privación de libertad precisamente por ejercer un derecho que tiene mucho que ver con la conciencia, aunque no sea precisamente con la objeción de conciencia. ¿No se puede llegar a otro tipo de sanción, en su caso, que no sea la prisión o la pena privativa de libertad? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Escuin.

El señor ESCUÍN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo de forma muy breve para mostrar la opinión de mi Grupo y precisar que en esta cuestión hay dos puntos. Uno es el problema de la insumisión, que no es el momento de tratarlo. Por cierto, recordaré a las señoras y señores Senadores nuestra posición al respecto con una reciente intervención que tuvo la Senadora Rosa Vindel en el Pleno de este Senado, que creo que conoce el tema. No es cuestión de hablar ahora de la insumisión. La pregunta era sobre una actuación del Cuerpo de la Guardia Civil en la detención de un insumiso. La verdad es que según nuestra experiencia profesional como abogados, no parece sino que estemos aquí en un tribunal juzgando algo sobre lo que este Grupo no tiene ningún elemento de juicio, salvo la información que ha dado el ilustre Senador que ha formulado la pregunta. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular manifiesta a este respecto que no puede tomar ni exponer ninguna opinión, aunque, por supuesto, sí lamentar siempre el que haya una víctima. Pero las explicaciones que ha dado la Secretaria de Estado nos parecen ajustadas, y sobre las dudas que pudieran existir al respecto, creo que una manifestación como es la del propio detenido de que fue un caso fortuito vincula, y vincula bastante. Ello, sin perjuicio de que, con los datos y pruebas necesarias, pudiera dar una opinión más de fondo y más valorativa.

Simplemente con esta información cabe manifestar que, en principio, la Guardia Civil debe gozar, a nuestro juicio, de todos los beneficios que se le pueden conceder a un Instituto como es éste, sin mancha y sin mácula y que, por supuesto, en esta detención estaba cumpliendo una función policial, y si algo puede empañar el honor de la Guardia Civil, la Seguridad del Estado debe ponerlo inmediatamente en antecedentes. Pero, por los datos que aquí se han dado, creemos que eso no ha ocurrido, salvo mejor prueba, que este Grupo no puede facilitar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría.

El señor GARRIDO ÁVILA: Gracias.

Voy a ser breve, señor Presidente.

Creo que, al hilo de la última cuestión que se ha suscitado en el debate de la Comisión sobre la pregunta concreta del Senador Petrizán, surgen varios asuntos. De una parte, la cuestión de fondo sobre la sanción penal o no penal, prisión, privación de libertad o no. Creo que el caso concreto al que él se refería es un hecho específico y en el que, sin perjuicio de las —llamémoslas— dos versiones enfrentadas, la que el Senador que formulaba la pregunta tiene directamente de la persona que había sido objeto de este incidente y la que nos da la Secretaria de Estado de Interior, en función de la investigación que se abrió inmediatamente en el Cuerpo de la Guardia Civil, al final, tenemos la suerte de que nuestro Estado social y democrático de Derecho, a través de la intervención del Poder Judicial,

será el que, finalmente, dilucide las conductas y las responsabilidades que en su caso hubiera.

Pero al hilo de eso, me mueve a preocupación, una vez más, lo que subyace en el fondo de todo esto. Creo que son demasiadas las veces —y ahí creo que nosotros, como representantes populares, tenemos un papel importante que jugar— en que, al final, el sospechoso es el responsable de la seguridad pública. Creo que ahí, sin perjuicio de que haya hechos concretos en los que, si hay una responsabilidad, el que la hace la paga, que era lo que decíamos desde pequeñitos, afortunadamente, la generalidad de las circunstancias —el 99,99 por ciento— es la contraria. Y muchas veces nos corresponde a nosotros que no recaiga siempre el papel del sospechoso en quien, presuntamente, va, en principio, con la carga de la legalidad a su favor. Quienes me conocen dirán que lo digo porque lo digo. Pues sí, señorías, lo digo con el orgullo de haber sido, durante once años, como dice la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mando directo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y para mí es un orgullo y una satisfacción haberlo sido. Créanme, señorías, que la paloma de la paz también les gusta llevarla a los propios responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los funcionarios que en ellas están encuadrados. Pero, al final, resulta que la sociedad y el Estado democrático han puesto en ellos la legalidad de la fuerza para cumplir y hacer cumplir la ley, y son demasiadas las veces en las que, al final, parece que estamos vinculando la carga de la prueba hacia quien va, en ejercicio de la legalidad, a cumplir y a hacer cumplir la ley. Son demasiadas las veces que se pone en el disparadero a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo en las cuestiones de orden público.

Decía su señoría que sólo estaban haciendo una sentada unos insumisos. Eso, en mi Código Penal está escrito, y en la Ley de Libertad y Seguridad Ciudadana, está escrito y, al final, corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evitar que eso, tramitado de otra manera, con arreglo a la Ley Orgánica del Derecho de Reunión, es una conducta lícita y no forzar siempre a que se convierta en una conducta ilícita. Lo que ocurre es que muchas de las veces, en todo este tipo de conductas —y no enjuicio nada, sino que hago un mero relato de circunstancias—, se suele llegar siempre sabiendo que estamos o que se está fuera del cumplimiento de la ley, a forzar la situación, para convertir en un incidente de orden público lo que nunca debiera haberlo sido, o para convertir en un acto penal o en una detención de manera violenta; que no puede ser de otra manera —cuando se produce un intento de fuga, no puede ser de otro modo la actuación por parte de los agentes del Cuerpo de Seguridad correspondiente—, se provoca siempre ese tipo de situaciones con otro interés, y no tengo empacho en decirlo, que es el de provocar justamente que la carga de la prueba vaya al lado contrario. Por poner un ejemplo, si es que sirve —y termino, señorías—, les diré que ayer hemos asistido en Andalucía a un ejemplo de eso en una cosa distinta, pero coincidente en lo mismo: un parlamentario provoca que se haga cumplir un ingreso en prisión por man-

dato de un juez de instrucción por no concurrir por tres veces a un llamamiento para declarar como inculpado en unas diligencias. Al final, la noticia es que un Diputado del Parlamento andaluz está en prisión. El culpable es el juez y no se sabe quiénes más. El parlamentario se ha puesto al margen de la ley no concurriendo, por tres veces, a un llamamiento de un tribunal superior de justicia. Forzamos la situación y convertimos, en lo que no es, un problema que tenía fácil solución. Es aplicable a este caso y a cualquier otro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias.

Asumo en su integridad la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a todos ustedes.

Se suspende la sesión durante cinco minutos, que lo serán de verdad. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

— PROYECTO DE LEY DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (621/000066.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el siguiente punto del orden del día: Dictamen del proyecto de Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Si les parece a sus señorías, podríamos desarrollar el debate en los siguientes términos. Como creo que los Grupos están en condiciones de agrupar la defensa de sus enmiendas a la totalidad del proyecto, en esa circunstancia esta Presidencia, si ustedes lo estiman oportuno, no va a poner ningún inconveniente en distribuir el tiempo de intervención de cada Grupo de acuerdo con la especialización de cada uno de los ponentes en su caso, y a las trece horas quince minutos a esta Presidencia le gustaría que se produjera la votación del Informe de la Ponencia. Por lo tanto, vamos a tratar de ajustar los tiempos a esa previsión. Antes de suspender la sesión de la mañana, asimismo veríamos el veto relativo al otro proyecto de ley que debemos debatir también en esta sesión, y les trasladaré a ustedes la impresión de la Presidencia respecto del tratamiento del

Dictamen, después de consultarlo con los señores Portavoces de los Grupos Parlamentarios.

En consecuencia, entramos en la discusión del Dictamen del proyecto de Ley. En primer lugar, quedan vivas las enmiendas de la señora Vilallonga Elviro y del señor Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra su señoría.

La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas de doña Isabel Vilallonga Elviro, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pongo en conocimiento de todos ustedes, por si alguna señoría no lo sabe, que en el trámite de Ponencia el propio título del proyecto de Ley se ha modificado y que a partir de ahora reza el Dictamen de la misma «De las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.»

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado a este proyecto de ley cinco enmiendas, las señaladas con los números 1 al 5 ambos inclusive.

La enmienda número 1 tiene como finalidad compatibilizar las funciones de un alto cargo con la representación de la Administración General en órganos colegiados relacionados con el cargo que se ocupe. Fuera de ese supuesto se incurriría en incompatibilidad.

La enmienda número 2 pretende la supresión del último apartado del artículo 3.1. del proyecto, de modo que no se perciba por el concepto de asistencia cantidad alguna dado que, como decíamos anteriormente, la compatibilidad se produce por razón del cargo o, mejor dicho, por la vinculación del cargo principal con los supuestos previstos en el artículo 3, por lo que no cabe incrementar la percepción por su desempeño.

La enmienda número 3 aporta, a nuestro entender, mayor claridad al apartado 3. del artículo 3, al entender que las cantidades a remunerar e ingresadas en el Tesoro Público no deben conceptuarse como devengadas a efectos de las obligaciones fiscales del alto cargo.

La enmienda número 4, de adición al artículo 12.1, tiende a dar publicidad a la sanción de imposibilidad para ocupar altos cargos —tal y como se denomina en el proyecto—, prevista en el artículo 13 contribuyendo a una mayor efectividad de este precepto.

La enmienda número 5 es concordante con la anterior, sólo que referida en este supuesto al artículo 12.2, párrafo primero.

Como han podido observar sus señorías, se trata de un bloque de enmiendas que tratan de aportar claridad y precisión a una materia muy delicada, precisamente en un momento en el que la opinión pública tiene sus ojos puestos en la transparencia y moralidad de la mal llamada clase po-

lítica que mejor denominaríamos servidores públicos, que constituyen los altos cargos contemplados en el proyecto. Nuestro deber, señorías, es no defraudar las expectativas que la ciudadanía tiene puestas en nuestra labor. Modestamente, creemos que nuestras enmiendas contribuyan a ello.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 6 y 7, salvo error de esta Presidencia, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió.

El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, son las enmiendas 6 y 7, puesto que la enmienda número 8 fue incorporada ya en el trámite de Ponencia.

Muy brevemente, en la enmienda número 6 proponemos modificar la letra b) del artículo 11.2., donde dice «ocultación de los datos» debe decir «la falsedad u omisión». Entendemos que, además de ser más técnica, es más taxativa y más concreta.

La enmienda número 7 es una enmienda de modificación. Ponemos una nueva redacción que entendemos más lógica y más concreta. Atendiendo a que la práctica totalidad de los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de este proyecto de Ley son nombrados por el Gobierno, entendemos que debería ser también este órgano el que los sancionase. Por esa razón, señor Presidente, mantenemos las dos enmiendas, las números 6 y 7.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Popular, salvo error de la Presidencia, tiene presentadas las enmiendas números 19, 20 y 21.

Para la defensa de las mismas, tiene su señoría la palabra.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Previamente, me gustaría solicitar de la Presidencia la aclaración de si posteriormente a la defensa de la globalidad de las enmiendas existirá un turno de portavoces de todos los Grupos.

El señor PRESIDENTE: Naturalmente, se procederá después al turno en contra de las enmiendas y, por último, a un turno de portavoces.

El señor GARCÍA CARNERO: Gracias.

Desde nuestra posición inequívocamente clara a la necesidad de la existencia de un régimen de incompatibilidades para los altos cargos del Gobierno de la Nación, el texto, según ha sido remitido por el Congreso de los Diputados, puede y debe mejorarse mediante la presentación de estas tres enmiendas señaladas con los números 19, 20 y 21, que seguramente sus señorías ya conocen, y que en este turno pretendo exponer las razones que justifican las mis-

mas y, si es posible, modificar el criterio de los grupos políticos para su aceptación e inclusión en el texto.

La enmienda número 19 que modifica en parte el artículo 2.2 de la Ley, pretende que los altos cargos, en lo que se refiere a la participación como accionistas en sociedades que contraten con el sector público, tengan idéntico tratamiento al que tienen Diputados y Senadores. Por lo tanto, lo que hacemos es modificar el texto de la Ley para ajustarlo al régimen de incompatibilidades que está establecido y que rige para parlamentarios pues, en definitiva, creemos que un alto cargo no ha de tener en este campo mayores privilegios ni mayores limitaciones que las que ellos tienen.

La enmienda número 20 pretende suprimir la letra d) del número 1 del artículo 3. Mediante esta disposición se pretende compatibilizar las actividades de altos cargos con la representación de la Administración del Estado en los consejos de administración de empresas públicas.

Yo podría relatar ahora mismo la enorme lista de altos cargos que están ocupando puestos en los consejos de administración de empresas públicas. Creemos que eso no debe ser así, que los altos cargos no deben pertenecer a órganos directivos ni a consejos de administración de organismos o de empresas cuyo capital sea público. Por eso pretendemos que se suprima y porque, además —y creo que algunas enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos también inciden en este sentido—, se está utilizando, muchas veces sin tener una relación ni una capacidad contrastada del cargo público, su presencia en los consejos de administración como forma de complementar o de incrementar las retribuciones que corresponden al alto cargo más que como una efectividad o una práctica o una mejora de la eficacia del funcionamiento de la empresa en cuestión.

Finalmente, la enmienda número 21, que pretende modificar el artículo 8, es casi de carácter técnico. Pretende dar un mayor rigor jurídico y una precisión técnica cuando se habla de las personas o instituciones que tendrán acceso a los registros de bienes que esta Ley establece para los altos cargos.

El artículo 8.3.a) establece que las Cortes Generales podrán acceder a esos registros de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos de las Cámaras. Nosotros pretendemos modificar ese apartado a) y, en lugar de decir «las Cortes Generales», que se explicita: «a) El Congreso de los Diputados y el Senado, conforme a lo que dispongan sus respectivos Reglamentos.»

Creemos que esto establece una mayor precisión, que se determina con toda claridad que pueden ser ambas Cámaras, cualquiera de ellas, quienes tengan acceso a eso, y no quedar a una forma arbitraria o subjetiva la aplicación del término «Cortes Generales», de manera que con que pudiese acceder una sola de las dos Cámaras se diese ya por superado ese trámite, impidiendo o limitando la posibilidad de otra Cámara.

Creo que no habrá inconveniente en ninguna de las tres, desde luego en esta última que lo que pretende es establecer claramente que cualquiera de las dos Cámaras, con la aplicación reglamentaria correspondiente, podrá acceder a esos registros de bienes.

Ése es el contenido de estas tres enmiendas que, como digo e insisto, pretenden mejorar el texto según fue remitido por el Congreso de los Diputados. Nuestro Grupo, caso de ser aceptadas, votaría favorablemente el texto según fue remitido, otra cosa es el informe de la ponencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El señor Alonso Colacios tiene la palabra para turno en contra.

El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista va a intervenir también el Senador Gallego en contra de las enmiendas referentes a los Títulos I, II y III.

Antes de entrar en el contenido de cada una de las enmiendas quiero decir que el proyecto de ley, desde que se inició su trámite en el Congreso hasta el Senado, lógicamente ha sufrido bastantes aproximaciones y mejoras.

Respecto a las enmiendas presentadas en el trámite de Comisión —tengo que decir que en el trámite de ponencia se aceptaron además de las enmiendas socialistas algunas otras enmiendas de grupos, concretamente la referida al Título— por el Grupo Parlamentario Mixto, y que ha dado por defendidas la Senadora que ha intervenido en su nombre, el Grupo Parlamentario Socialista se opone en los mismos términos.

En cuanto a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular al artículo 2 de la Ley, que se refiere concretamente a los principios generales que deben inspirar el proyecto de ley sobre el tema concreto de participación de los altos cargos públicos en las empresas que contraten con las Administraciones Públicas, he de decir que en este artículo también ha habido una serie de aproximaciones y de mejoras tanto en el Congreso como aquí en el trámite en ponencia.

La justificación que el Grupo Parlamentario Popular ha dado en la enmienda número 19 —me imagino que en el trámite de Pleno será más exhaustivo—, nosotros, tal como está presentada, lógicamente no la aceptamos porque es diferente la posición de Diputados y Senadores a la de altos cargos de la Administración General del Estado, ya que éstos tienen competencia en materia de contratación con el sector público, que es el objeto de este artículo y de esta participación entre los altos cargos en empresas que contraten concretamente con Administraciones Públicas. Por lo tanto, no entendemos esa justificación.

No obstante, como me imagino que bien en réplica o bien en el debate en el Pleno hará otra serie de justificaciones, yo, gustosamente, daré contestación muy detallada a esta enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Popular que, como digo, ha sido ampliamente mejorada, tanto en el trámite en el Congreso como en el Senado.

Las enmiendas números 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y número 20 del Grupo Parlamentario Popular, se presentan al artículo 3, que se refiere al régimen de actividades de los altos cargos públicos y del Gobierno de la nación. Al artículo 3, que es de compatibilidad con actividades públicas, tanto el Grupo

Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como el Grupo Parlamentario Popular tienen sendas enmiendas respecto al tema de fondo, que es pertenencia o no de altos cargos a los consejos de administración.

La posición del Grupo Parlamentario Socialista a este respecto, y en coherencia con las manifestaciones y con las mejoras que hemos introducido en la Ley de Incompatibilidades de altos cargos públicos, es que, como principio general, creemos que la participación de los altos cargos en las empresas que contraten con las Administraciones Públicas y que se contemplan, como digo, en este artículo 2.2, no es un privilegio por el Grupo Parlamentario Socialista. Por consiguiente, toda nuestra intervención respecto a la compatibilidad de altos cargos públicos —referida en los artículos 3 y 4 del proyecto— es equilibrada y se ajusta a nuestra creencia de que para que se dé una garantía y eficacia de defensa de los intereses generales del Estado, es muy necesaria la participación regulada —como se contempla en el proyecto de ley— de los cargos públicos.

En concreto, las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a este tema suprimen algunos aspectos del artículo. Concretamente se suprime en el apartado d) entidades de derecho público y, a su vez, que no se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración de dicho organismo, empresas o entidades. En coherencia, suprime el apartado último del apartado d), en el que se dice que en el supuesto de que concurren razones que lo justifiquen, mediante resolución motivada, el Consejo de Ministros podrá autorizar con carácter excepcional la pertenencia a un tercer y sucesivos consejos de administración. Por tanto, también en concordancia con esta supresión, lógicamente, suprimen el artículo 3, porque se contempla la remuneración de la compatibilidad de cargos públicos, donde recogemos que no pueden ser más de dos consejos de administración, y así perfilamos esta compatibilidad en el contenido de la ley y la ajustamos. En nuestra filosofía la pertenencia no es un privilegio, sino que está orientada a defender con mayor eficacia y garantía los intereses de los órganos de la Administración del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gallego Cuesta.

El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a tratar de responder a las enmiendas presentadas a los Títulos IV y siguientes y disposiciones del proyecto de ley.

El Título IV del proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado se refiere a los órganos de gestión, vigilancia y control y consta de tres artículos.

Hay una enmienda presentada, lo cual lleva a reflexión sobre el importante debate realizado en trámites anteriores, de acercamiento y de síntesis de la posición de los diferentes grupos parlamentarios en este Título IV. La única enmienda es la número 21, del Grupo Parlamentario Popular,

de modificación al artículo 8, registros. El párrafo segundo del apartado 3 del mencionado artículo literalmente dice: «pueden acceder al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos: a) Las Cortes Generales, de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos de las Cámaras.» La redacción que propone dicha enmienda es la siguiente: «a) El Congreso de los Diputados y el Senado, conforme a lo que dispongan sus respectivos Reglamentos.»

Desde nuestro punto de vista es verdad que en el artículo 66 —en términos constitucionales— se habla de Cortes Generales y de quienes las integran: el Congreso de los Diputados y el Senado. Y siendo ambas expresiones correctas, ya nos inclinamos, precisamente en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados, por una enmienda transaccional, en concreto la número 27, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que ya aceptamos. No es que sea incorrecta la formulación hecha por el Grupo Parlamentario Popular, pero en el Congreso de los Diputados ya nos decidimos por una que es adecuada, rigurosa y precisa técnicamente. Además es la que se utiliza habitualmente en los procesos legislativos al referirse a las Cortes Generales. Todos sabemos que éstas están integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

En cuanto al Título V, que se refiere a la potestad sancionadora, muestra un completo régimen sancionador con la tipificación de las infracciones y las sanciones cuya dureza, precisamente, va dirigida a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de independencia e imparcialidad por los altos cargos en el desempeño de sus funciones. En el Congreso de los Diputados también se incorporaron enmiendas transaccionales y hubo una importante postura de acercamiento a este Título V. La ley refuerza el régimen sancionador, precisamente consagrando la dedicación y la incompatibilidad absoluta de los altos cargos, en síntesis con el debate del estado de la Nación, celebrado en el año 1994. Desde ese punto de vista, se han presentado diferentes enmiendas a este Título V, las cuales voy a tratar de contestar.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado la enmienda número 6 al artículo 11 que regula las infracciones en muy graves, graves y leves. A efecto de modificar el texto de la ponencia, en concreto en su apartado 2, letra b) propone la siguiente redacción: «2. Se consideran infracciones graves: b) La falsedad u omisión de los datos y documentos que deben ser presentados conforme a lo establecido en esta Ley.» Por tanto, incluye: u omisión de los datos y documentos...

No podemos aceptar esta enmienda, porque, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, la falsedad es una acción dolosa que supone la intencionalidad del autor, por lo que merece ser calificada, obviamente, de infracción muy grave. Por otro lado, establecer como infracción la omisión de datos y documentos, tal y como pretende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, plantearía dificultades en el momento de determinar la responsabilidad de los altos cargos, ya que, en principio, la omisión parece hacer referencia a una ac-

ción o actuación involuntaria del autor. Consideramos que es preferible referirnos a la ocultación, como establece actualmente el artículo 11.2, b), ya que supone una actuación deliberada, aunque de menor gravedad que la falsedad.

Puesto que no ha sido defendida la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nos vamos a oponer a ella y no daremos argumentos, aunque los tenemos y muy sólidos.

La enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al artículo 12.1, es de adición, que propone añadir a dicho artículo el siguiente texto: «Así como el período concreto de imposibilidad para ocupar altos cargos que lleve aparejado.» No se acepta porque, precisamente, la imposibilidad para ocupar altos cargos —lo digo con sumo respeto a este grupo parlamentario— a que se refiere el artículo 13 de este proyecto, no está concebida como una sanción para el infractor, sino más bien como una obligación que se le impone al Gobierno de la Nación. El texto de la Ponencia recoge, precisamente, esta intencionalidad legislativa y, al menos, nuestro Grupo la apoya.

La enmienda número 5, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al artículo 12.2, párrafo primero, es de adición. No se acepta por los mismo motivos y argumentos que he señalado anteriormente y que no voy a reproducir, en aras a la brevedad.

Nuestro Grupo se va a oponer a la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al artículo 12.1. Puesto que no ha sido defendida no me extenderé en mis argumentaciones. Si se defiende en el Pleno daré argumentos, que también considero muy válidos y que, posiblemente, serán aceptados por dicho Grupo.

La enmienda número 15, también del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al artículo 12.4, es de adición. No se acepta porque se considera innecesario introducir en el texto este párrafo propuesto.

La enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, lo es al artículo 16.1. El artículo 16 se refiere a los Órganos competentes del procedimiento sancionador y coincide con su enmienda número 29 del Congreso de los Diputados. No la aceptamos porque se entiende que es un procedimiento más ágil atribuir al Ministro para las Administraciones Públicas la competencia para incoar los procedimientos cuando el infractor no tenga la condición de miembro del Gobierno de la nación o de Secretario de Estado.

La enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo es al artículo 16, apartado 3, párrafo primero. Es una enmienda de adición y no la aceptamos porque, como ya se ha señalado con anterioridad, la facultad de cesar al infractor constituye una responsabilidad política y no una obligación jurídicamente exigible. En todo caso, no es el objeto de este proyecto.

La enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la rechazamos, precisamente a la espera de que sea defendida en el

Pleno, exponiendo los argumentos, que también son contundentes, para oponernos.

La enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a la disposición final única, apartado 1, no la aceptamos. Esperaba que hubiera sido defendida, porque ese tema, que lo hablamos en la Ponencia, lo podíamos haber solucionado con una enmienda transaccional. Habrá que reservarlo para el Pleno y ver si ese Grupo lo acepta.

Finalmente, quiero presentar dos enmiendas, que son de corrección de errores y de estilo. Mi Grupo Parlamentario considera que es importante presentar estas dos enmiendas «in voce», una a la disposición adicional tercera, apartado 1, y otra a la disposición adicional tercera, apartado 2. Se trata de una mejora técnica. El texto dice: «Las Entidades de Derecho Público y sociedades mercantiles deberán informar a la Inspección General de Servicios...» El proyecto de ley se refiere a la Inspección General de Servicios de la Administración pública.

Nosotros consideramos —para conservar esa congruencia, con independencia de que haya enmiendas de fondo de algún Grupo que no coinciden, como, por ejemplo, del Grupo Parlamentario Popular— que sí sería conveniente, en aras de esa congruencia, que se admitieran estas dos enmiendas, que son de corrección de errores o de estilo, si se prefiere, y que en estos momentos presento a la Mesa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gallego.

Entramos en el turno de portavoces.

La Presidencia les ruega que no sobrepasen el tiempo máximo de cuatro minutos en sus intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el señor Galindo.

El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente quiero decir que nosotros no hemos presentado enmiendas al texto, por lo que lo asumimos en su integridad y con los acuerdos que mayoritariamente las fuerzas políticas puedan acordar. O sea, estamos totalmente de acuerdo con el texto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.

El señor SANZ CEBRIÁN: Muchas gracias, señor Presidente.

Doy por reproducidos los argumentos que utilizamos en el anterior turno de defensa de las enmiendas, en particular en lo referido a la importancia del proyecto de ley. También quiero anunciar nuestro voto favorable al mismo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría. ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)

Tiene la palabra el Senador García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Utilizaré los cuatro minutos y, si es posible, alguno más por la brevedad de los turnos anteriores, con una doble función: en primer lugar, dar réplica a las argumentaciones expresadas en el rechazo de nuestras enmiendas por los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y, en segundo lugar —propriadamente el turno de portavoces—, para fijar la posición de mi Grupo respecto al proyecto de ley que hoy nos ocupa. La brevedad, señores del Grupo Socialista, en nuestra intervención y en la exposición de los argumentos es obligada, se trata pura y exclusivamente de acatar las indicaciones de la Presidencia.

Respecto a la enmienda número 19, le diré que el principio que debe generar esta normativa, y en el cual debemos ampararnos —al menos así lo hace mi Grupo—, es que la condición de alto cargo del Gobierno o de la Administración no sea la razón o el pretexto o el elemento de un enriquecimiento patrimonial. Ya sé que la práctica anterior, la multitud de casos anteriores pueden llevarnos a vigilar y a ser muy puros en esta cuestión, pero el principio no ha de ser castigar el patrimonio de aquellas personas que antes de acceder al alto cargo de la Administración lo hubiesen heredado o adquirido legítimamente. De lo que se trata es de vigilar que la condición de alto cargo no sirva para enriquecimientos espurios o anormales y de no castigar el patrimonio o la condición de aquellas personas que lo hubiesen adquirido antes. Ésa es la esencia de esta enmienda.

Por lo que se refiere a la enmienda número 20, antes le dije que no iba a citarle —sería imposible en todo el día siquiera relacionarle— la gran cantidad de altos cargos que ocupan varios consejos de administración —ni siquiera me parece de estilo, aunque ya sé que ustedes lo limitan ahora a dos, pero me refiero a la situación actual—, pero sí quiero decirle que la práctica demuestra que ni se hace una mayor defensa de los intereses del Estado porque esos puestos los ocupen altos cargos, ni existe una razón de profesionalidad. Por ejemplo, hay empresas dedicadas al sector de transporte que tienen altos cargos expertos en educación o empresas dedicadas al sector de la energía que tienen altos cargos expertos en función pública.

Por tanto, no existe relación con la experiencia profesional, que es la que ha de primar en la aportación que se haga, sino que se trata pura y simplemente de una forma de pagar o de incrementar las retribuciones. Ésa es la razón, junto a las experiencias tan nocivas anteriores, por la que nosotros creemos que no deben ocuparse. Insisto, la defensa de los intereses de la nación no se hace mejor porque eso lo ocupe un alto cargo público. Ustedes, por ese sentido patrimonial de identificar el Gobierno con el Estado, a veces creen que los miembros del Gobierno son quienes mejor defienden el Estado, pero eso no es así. Tampoco

creo que lo defiendan peor, pero no es patrimonio en cualquier caso.

La enmienda número 21 es fruto de una identificación que el tiempo ha hecho asentar en las mentes socialistas, y es que el hecho de que las mayorías del Congreso de los Diputados y del Senado hayan sido siempre iguales les ha permitido a ustedes identificar en su subconsciente que da lo mismo lo que se haga en una Cámara que en otra. Es más, a veces parte del poco prestigio exterior que tiene la Cámara en la que nos encontramos tiene su origen ahí. Estamos hartos de ver cómo trámites atribuidos a las Cortes Generales por leyes o por normas se despachan en una sola de las dos Cámaras y no me parece bien que desde esta Cámara no se aproveche cualquier circunstancia, máxime cuando usted ha dicho que no hay ningún impedimento para establecer claramente que esto también son las Cortes Generales y que lo que abunda no daña, para decir que el Congreso de los Diputados y el Senado pueden tener acceso a ese registro, porque puede ocurrir, y a lo mejor no muy lejos en el tiempo, que las mayorías cambien en una y otra cámara y que los intereses de una Cámara y otra o de sus mayorías y minorías no sean exactamente los mismos. Ésa es la razón.

Paso, con la benevolencia del señor Presidente, a fijar la posición de mi Grupo respecto al texto del proyecto de ley.

En principio, debo decir que mi Grupo es favorable, porque la experiencia, sobre la que no ahondaré porque está en la mente de todos, así lo demuestra. Demuestra dos cosas: primero, el fracaso, a nuestro juicio estrepitoso, del Gobierno en la aplicación de las normativas existentes. Segundo, que esta ley que estamos tramitando hoy no hubiese sido necesaria si se hubiesen atendido las recomendaciones, las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a las leyes que existen en este momento, que es la Ley 25/1983, modificada por la Ley de 22 de diciembre de 1991. Ya entonces e, incluso en los propios Presupuestos Generales del Estado de este año, presentamos algunas enmiendas que, de haberse tenido en cuenta, no nos veríamos hoy en la necesidad de tener que adoptar esta normativa. Señorías, ¿por qué estamos tramitando esta ley? Pues, dicho sea de paso, es una ley que se tramita como consecuencia de la resolución número 92 aprobada en el debate del estado de la Nación no de este año, que era lo que deberíamos estar debatiendo, sino del año 1994. Curiosamente, estamos debatiendo ahora resoluciones del año 1994 por un procedimiento de urgencia, no en esta Cámara, pero sí en la otra, donde se otorgó competencia plena a la Comisión que lo aprobó y se soslayó el trámite de Pleno. Quizá, si la urgencia no es la razón, y eso parecen indicar las señales que me hacen desde el Grupo Parlamentario Socialista, habrá que pensar que lo que se pretendía era eludir un escabroso tema en el debate ante el Pleno y su difusión pública. En cualquier caso, hace año y pico que se adoptaron estas resoluciones que hoy estamos debatiendo.

Si ha sido necesario llegar a esta situación, lo ha sido por dos razones; en primer lugar, porque la normativa se ha mostrado escasa, ya lo dijimos en su momento, y, en segundo lugar, porque ha habido casos tan especialmente

significativos de altos cargos que han hecho uso de su condición para enriquecerse que no ha quedado más remedio que abordar el tema.

Yo tengo el buen gusto parlamentario de no citar casos, siempre y cuando no se me provoque.

El señor PRESIDENTE: Si me disculpa, señoría, tenga el buen gusto parlamentario de atenerse a los tiempos.

El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor Presidente. Gracias.

De manera que, claramente, el Gobierno ha fracasado en la aplicación de la norma anterior. Si yo les leyese ahora la exposición de motivos de la Ley 25/83, seguramente provocaría sonrojo en más de uno de quienes nos escuchan. De la exposición de motivos que fundamentó aquella ley y del cumplimiento que ha habido después mejor no hablar.

En cualquier caso, nosotros estamos de acuerdo en que hay que regular las incompatibilidades y de que hay que hacerlo siguiendo cuatro principios: primero, la dedicación de los altos cargos ha de ser completa, exclusiva, a la tarea que se les encomienda; segundo, hay que evitar el conflicto entre los intereses privados de las personas y los intereses públicos que manejan los altos cargos, determinándose perfectamente estos intereses de manera que no haya lesión entre unos y otros, sobre todo, en lo que se refiere a los intereses públicos; tercero, ha de haber una transparencia absoluta, pues la sociedad lo exige, en la situación patrimonial de quienes representan a los ciudadanos y de quienes ostentan esos altos cargos públicos; y cuarto, hay que establecer, como hace la ley, un régimen disciplinario para corregir, para modificar, cualquier privilegio o impureza que pudiera surgir de ello. Por esta razón nosotros estamos a favor de esta ley que creemos que enriquece y mejora —y esperamos que en el trámite de Pleno se puedan incluir— nuestras enmiendas, que es lo que deben hacer las enmiendas.

Concluyo, señor Presidente, diciendo que vamos a votar, como usted ya nos indicó y el Reglamento establece, el informe de la Ponencia. Como he dejado perfectamente claro nuestro interés por esta ley, por el texto según venía del Congreso de los Diputados e, incluso, enriquecido por nuestras enmiendas, si lo que se va a votar, como dice el Reglamento, y así lo hará el señor Presidente, es el informe de la Ponencia, nosotros habremos de votar en contra, porque en la Ponencia ya lo hicimos al incorporarse una enmienda, la señalada con el número 8, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que modifica el título de la ley y, consecuentemente, varios de sus apartados en la exposición de motivos, y porque creemos que esta enmienda ni mejora ni aclara ni determina aspectos de la ley; al contrario, creemos que puede dar lugar a confusiones y que, desde luego, puede dar lugar, incluso, a interpretaciones tremendamente conflictivas que no están en el ánimo del Grupo Parlamentario Popular y creíamos que tampoco en el ánimo del

Grupo Parlamentario Socialista. Ellos sabrán las razones de su aceptación.

Así pues, nuestro voto al informe de la Ponencia, que no al texto, será contrario por esa razón, salvo que se modifique y vuelva el texto a su origen, eliminando la enmienda número 8, de Convergència i Unió, que fue incorporada en el trámite de Ponencia.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Alonso Colacios.

El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.

Dije en mi intervención anterior que estaba esperando alguna que otra argumentación más profunda por parte del Partido Popular respecto de las enmiendas 19 y 20.

La enmienda 19, de modificación del artículo 2.2, que, como dije, fue modificada en el Congreso de los Diputados, hace referencia a la participación de los altos cargos en empresas que contraten con las Administraciones públicas. Esto, como dije en mi intervención, no tiene nada que ver con la justificación que hizo en la primera intervención el representante del Grupo Parlamentario Popular, pues hablaba de Diputados y Senadores cuando sabe perfectamente que los Diputados y Senadores, que yo conozca, por lo menos los de mi Grupo, no realizan ningún tipo de contrato público ni de asesoramiento con la Administración o empresa pública dependiente de ésta.

No obstante, hubo aproximaciones, entre otras, las siguientes que voy a mencionar para informar e ilustrar a esta Comisión. Añadimos, por ejemplo, la frase «de cualquier naturaleza de la empresa contratante», que no figuraba en el texto que se envió desde el Gobierno, para referirnos a las empresas que tengan conciertos y contratos, ampliándose así el ámbito de la empresa a controlar.

La enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Popular, no tiene, a nuestro juicio, un horizonte de mayor control de los altos cargos públicos y de su participación en empresas públicas. Tal como queda redactada esta modificación sería, a nuestro juicio, un paso atrás. ¿Por qué digo esto? Porque lo ha dicho en esta segunda intervención el representante del Grupo Parlamentario Popular. La actual normativa no distinguía, efectivamente, si la participación en la empresa era adquirida antes o después del nombramiento como alto cargo público. Con el texto que estamos debatiendo y que ha sido aprobado en Ponencia establecemos, sin embargo, mayores garantías, ya que ha de desprenderse de la participación en las empresas adquiridas antes de ser nombrado alto cargo público en el plazo de un mes. Ésta es una enmienda que hemos presentado. En el caso de que una vez nombrado alto cargo público adquiriera la participación, vía sucesión hereditaria, después de haber sido nombrado, habría de desprenderse de esta participación en el plazo de tres meses desde su adquisición. Por tanto, hemos dado un paso hacia adelante a la hora de tener un mayor control del alto cargo público en lo que se refiere a su participación en las empresas que contraten

con las Administraciones públicas, ya que en el fondo es ésa la orientación de este artículo. A nuestro juicio, la modificación que presenta la enmienda número 19 es bastante regresiva y restrictiva a la hora de luchar de verdad por las incompatibilidades entre los altos cargos públicos que tengan participación en empresas que contraten con las Administraciones públicas.

Respecto de la enmienda número 20, que presenta el Grupo Popular, el tema de fondo es la pertenencia o no de los altos cargos a los consejos de administración. Por la segunda intervención del representante del Grupo Popular nuestro Grupo ha creído entender que ustedes son favorables a que se regulen y normalicen con mayores garantías las incompatibilidades entre altos cargos del Gobierno y de la Administración General del Estado. En ese sentido queremos precisar —sobre todo para informar e ilustrar a sus señorías respecto de todo lo que ha dicho el representante del Grupo Popular hasta llegar a esta enmienda número 20, referente a la pertenencia o no de altos cargos a los consejos de administración— que, según parece, el Grupo Popular sí quiere que haya compatibilidad para que los altos cargos puedan pertenecer a los consejos de administración. *(El señor García Carnero hace signos negativos.)* Veo que su señoría me está diciendo que no, y aunque no quiero argumentar más al respecto, sí me gustaría hacerle unas precisiones en este momento, aunque tendré más argumentaciones que aportar en el trámite del Pleno.

No sé si ello será también consecuencia de que, por lo visto, a veces hay que adoptar posiciones demagógicas en función del calor político del momento. En cualquier caso, creo que ésa no debería ser la posición a adoptar por responsables políticos —en este caso, Senadores o Senadoras— ante un proyecto de ley de este calibre. Deberíamos tener otra perspectiva a la hora de legislar en materia tan importante. ¿Por qué digo esto? Como sabe su señoría perfectamente —y ha tenido la información debida del debate del Pleno en el Congreso—, nosotros dijimos que existen precedentes en la legislación autonómica reguladora de altos cargos —y me refiero a altos cargos de Comunidades Autónomas donde el Grupo Popular gobierna— que establecen la posibilidad de que pertenezcan a consejos de administración.

Pero le digo más todavía, por ejemplo, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares, de 24 de octubre de 1984, Comunidad gobernada por el Partido Popular, establece en su artículo 32 la posibilidad de que los altos cargos puedan ostentar cargos y representación de la Comunidad de Baleares en los consejos de la administración de empresas de carácter público cobrando dietas. Esto se dice específicamente. Pero es más, no se pone ningún límite en esa Ley, mientras que en este proyecto se establece que como máximo se pueda pertenecer a dos consejos de administración. Además, como conoce perfectamente el Senador Cuesta, ponente del Grupo Parlamentario Socialista en el trámite del Congreso de los Diputados, también dijimos que en la Ley de incompatibilidades de Cantabria, Comunidad gobernada conjuntamente... *(Rumores.)*, o si lo prefieren me

puedo referir a la Comunidad de Castilla y León, Comunidad gobernada por ustedes desde 1989.

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que no establezcan diálogos entre ustedes. *(Risas.)*
Prosiga, señor Senador.

El señor ALONSO COLACIOS: La Ley de 6 de octubre, en su artículo 10.b), establece claramente que no está sujeta a incompatibilidad la pertenencia de los altos cargos a los consejos de administración.

Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Socialista y la mayoría de los grupos de esta Cámara —se lo digo sinceramente— queremos que se establezca un régimen de incompatibilidades para que no se produzcan fenómenos verdaderamente lamentables como los que se han producido durante estos últimos años.

En definitiva, y para aclarar la posición del Grupo Socialista, quiero decirle que nosotros nos comprometimos ya en el año 1993, a través de nuestro programa electoral, a reformar la Ley de Incompatibilidades previamente a la llegada del Gobierno socialista de nuevo al poder. Pero, es más, en el compromiso que adquirimos en el debate del estado de la Nación celebrado en 1994 también asumíamos la elaboración de una ley de incompatibilidades de un gran rigor y de un gran control para que estas conductas no se produjeran más en el futuro, y en el mes de octubre de ese mismo año empezamos con esa tramitación en el Congreso de los Diputados, es decir, incluso antes de que se presentara esa enmienda del Grupo Popular a los presupuestos de 1995 a que usted se refiere, y en eso estamos. Actualmente seguimos tramitando esa ley de incompatibilidades para hacer posible que el impulso democrático que el Partido Socialista propugnó y defendió ante todos los ciudadanos se cumpla en la actual legislatura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, creo que está suficientemente debatido el contenido del proyecto.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento, se incorporan al informe de la Ponencia las dos correcciones de estilo que se han producido. Creo que ustedes ya saben cuáles son, pero por si algún señor o señora Senadores no las conocen, les diré que se refieren a la disposición adicional tercera, apartados 1 y 2. Donde se dice: «a la Inspección General de Servicios» se añade únicamente la expresión: «de la Administración pública».

Con estas incorporaciones, vamos a proceder a la votación del texto del informe de la Ponencia. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; en contra, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, ¿han decidido quién va a presentar ante el Pleno de la Cámara el dictamen de la Comisión?

El señor GARRIDO ÁVILA: Señor Presidente, si no hay opinión en contra, esta Comisión entiende que podría presentarlo el propio señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El señor Presidente no le da las gracias por ello. (*Risas.*)

— PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (621/000069.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas.

Seguidamente hará uso de la palabra la Senadora Boneta Piedra para defender la propuesta de veto número 1 a dicho proyecto y, posteriormente, tras la votación del veto, estudiaremos cómo vamos a abordar el trabajo de esta tarde.

Tiene la palabra la señora Boneta.

La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Voy a exponer en líneas muy generales las razones por las que yo misma, en representación de Eusko Alkartasuna dentro del Grupo Mixto, he planteado esta propuesta de veto.

Entendemos que este proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas adolece de graves deficiencias que difícilmente pueden ser subsanadas mediante el sistema de presentación de enmiendas parciales. La filosofía de la ley, cuyos objetivos parecen dirigirse a la evitación de cualquier atisbo de corrupción —con lo que estamos absolutamente de acuerdo—, así como el carácter técnico de la misma, nos parecen correctos. Sin embargo, hay una serie de razones que nos llevan a pensar que esta ley puede ser ineficaz e impracticable.

En primer lugar, la proliferación de artículos y apartados a que hace referencia la disposición final primera como constituyentes de legislación básica y, muy especialmente, la proclamación de carácter básico de las normas de desarrollo a que se refiere la disposición final tercera, al afectar parcialmente a prácticamente todos los Títulos y Capítulos de la ley —no hay ninguno que quede a salvo de alguna norma de carácter básico, según el proyecto—, deja vacías de competencias las facultades legislativas de las Comunidades Autónomas con competencias, incluso exclusivas, en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones, así como al régimen local, lo que en nuestra opinión se revela como atentatorio al sistema constitucional y estatutario. Por otra parte, el excesivo reglamentarismo y formalismo de la ley, la injerencia o tutela de las competencias de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y también de las entidades locales, la inaplicabilidad práctica de alguno de estos preceptos, como antes decíamos, a la contratación de las Administraciones locales, e incluso la contradicción de algunos de sus preceptos con los que se contienen en la Ley 30/1992, de Procedimiento y Régimen Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son razones que se estiman suficientes para plantear este veto.

Por eso y porque, en conclusión, el proyecto, aparte de poco respetuoso con las atribuciones de las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva de la propia auto-

nomía local, porque su redacción actual se nos plantea como ineficaz por reglamentarista y prolija, de difícil aplicabilidad a las instituciones locales, como hemos dicho, además de no garantizar una contratación —a pesar de que se establezcan los controles necesarios— que sea ágil para la resolución de los problemas, es decir, por su falta de agilidad y porque creemos que puede ser tan ineficaz que se produzca la tentación de dejarla de lado, es por lo que hemos planteado este veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós.

El señor CERCÓS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista va a oponerse al veto defendido por la Senadora Boneta, por entender que los argumentos que ha expresado no se corresponden con la realidad objetiva de un proyecto que ya fue presentado en la pasada legislatura, en 1992, y que recibió un cúmulo de enmiendas que fueron incorporadas en el Congreso de los Diputados y que se han respetado en el que ahora se presenta. Se trata, pues, de un proyecto cuya tramitación se paralizó por haber concluido la anterior legislatura, pero que había recorrido toda la tramitación del Congreso de los Diputados.

Las enmiendas allí aprobadas se han tratado de recoger en el texto que ahora figura en esta Cámara. Pero, además, se ha vuelto a mejorar por segunda vez en su trámite en el Congreso durante esta legislatura; es decir, que este proyecto de ley ha pasado dos veces por el Congreso de los Diputados en dos legislaturas consecutivas. Y si se analiza en profundidad, se verá, como digo, que se ha mejorado sensiblemente. Por otro lado, vamos a analizar con todo interés las enmiendas presentadas en el Senado para recoger el mayor número posible, es decir, con el mejor espíritu de colaboración y de aceptación de las sugerencias que se puedan formular por los Grupos. Sin embargo, no compartimos la actitud de rechazo de la ley, sólo expresada por la representante del Grupo Mixto, perteneciente a Eusko Alkartasuna.

Creemos que, en líneas generales, el proyecto satisface plenamente los objetivos de garantizar los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia de contratistas, que ha sido uno de los temas centrales. También pensamos que se ha hecho un esfuerzo importante por el respeto a las competencias autonómicas —como podremos ver en el debate de cada una de las enmiendas, señoría—, y la expresión que nos hace respaldar el texto que estamos debatiendo, su idoneidad y oportunidad también descansa, en cuanto a la distribución de competencias se refiere, en reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, a las que aludiremos en el debate de cada una de las enmiendas. Por otro lado, todo el proyecto de ley está salpicado de adaptaciones y transferencias de las directivas europeas 93/37, 93/36 y 92/50. Creemos que no habrá ninguna intención de interpretación de estas directivas contraria a su aceptación como normas que deben ser aplicadas

en todo el planteamiento normativo del Estado español, directivas que en este momento son esgrimidas por este Senador como argumento fundamental que respalda la redacción de los correspondientes artículos.

La ley de contratos se refiere a todas las Administraciones públicas y, en concreto, a la Administración general del Estado, a la Administración autonómica y a la Administración local, en las competencias que están reconocidas hasta estos momentos por toda la legislación del Estado. Pero, además, creemos que el proyecto de ley avanza en los objetivos que debería tener una ley de contratos del Estado, como son acentuar la publicidad y la transparencia en la contratación administrativa a todos los niveles. E incluso en aquello a lo que se refería la Senadora como de menor regulación, en el caso de la Administración local, se puede comprobar que la existencia de la mesa de contratación se garantiza en todos los casos, incluso en los procedimientos negociados, que eran los llamados a contratación directa. Por tanto, creemos que la ley establece una garantía de participación, puesto que los proyectos definidos en la ley como menores pueden tener una mayor frecuencia o asiduidad en el desenvolvimiento de la propia actividad de las corporaciones locales. Y esos proyectos también tendrán su mesa de contratación y los asesoramientos técnicos pertinentes.

Sin pasar a pormenorizar los aspectos que pueden ser positivos desde la óptica de todas las Administraciones, creemos que es importante la apertura de todos los contratos a la libre concurrencia comunitaria, así como que se resuelvan las deficiencias puestas de manifiesto en la aplicación de la actual Ley de Contratos que, por otra parte, es objeto de una valoración bastante positiva entre los propios profesionales en los aspectos concretos de las fórmulas de contratación, es decir, tanto en el caso de suministradores, en la figura de asistencia y asesoramiento, como en cualquiera de los contratos de obra. Sin embargo, la legislación que contemplamos modifica, enriquece y aclara sensiblemente la actual Ley de Contratos del Estado.

Por último, se agiliza y simplifica el procedimiento de contratación y se cierra con un cuerpo normativo completo para todas las Administraciones lo que, desde nuestro punto de vista, es positivo y nos hace rechazar el veto que ha sido defendido por la Senadora representante del Grupo Mixto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós.

En turno —que espero breve— de portavoces, tiene la palabra la Senadora Boneta.

La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

No voy a dedicar este turno a responder a cada una de las cuestiones planteadas por el Senador Cercós. Únicamente tengo que decirle que la antigüedad de un proyecto, o sus anteriores recorridos, no garantizan su idoneidad. Puede ser muy antiguo y haber empeorado su primera redacción en parte del recorrido, lo cual no quiere decir que

el veto que hemos planteado se pueda considerar como una obstrucción, sino que lo teníamos planteado en función de una serie de cuestiones a las que hemos hecho referencia antes y que creemos que son importantes. Por ello, pensamos que habría que considerar dichas cuestiones, al menos, en el curso del debate de algunas de las enmiendas parciales que los demás grupos y nosotros mismos hemos presentado y que van a permitir modificar no aquello, por supuesto, con lo que todos estamos de acuerdo y a lo que ha hecho referencia el Senador Cercós, como son la igualdad, la no discriminación, es decir, una serie de principios elementales en materia de contratación, sino aquello que hace difícilísima la continua intervención, por ejemplo, de los dictámenes del Consejo de Estado, la salida de algunos de los contratos y, sobre todo, que provoca una injerencia y una tutela excesivas del Consejo de Estado sobre las corporaciones, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría. ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.) Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente.

Entendemos y compartimos las razones de fondo esgrimidas por la señora Boneta, y buena prueba de ello son las más de 20 enmiendas de índole competencial que hemos presentado a este proyecto de ley. Ahora bien, desde un prisma estrictamente formal, lo que no podemos compartir es que el veto sea el medio idóneo para mejorar o variar la línea intervencionista y de menoscabo de las atribuciones de los parlamentos autonómicos que, en cierto modo, afecta a este proyecto de ley, pues, como se dice en frase hecha, y a mi juicio bien hecha, el remedio, el veto, es peor que la enfermedad, que sería la ausencia de una ley adaptada a la normativa europea y bien sistematizada, aunque, como decimos, puede incurrir en excesos centralizadores y restrictivos para los Parlamentos autonómicos con competencia en la materia.

El camino correcto, a nuestro juicio, discurre por la presentación de enmiendas al proyecto, bien motivadas y con el ánimo más constructivo, y así vamos a hacerlo desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En este caso, señorías —y compréndase bien—, creemos que la forma es, por lo menos, tan importante como el fondo.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina.

El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para mostrar nuestro posicionamiento con respecto al veto presentado por la Senadora Boneta y

anunciar que vamos a oponernos al mismo, aunque no podemos dejar de estar preocupados por algunos de los aspectos que ella ha planteado.

Haciendo referencia, concretamente, a todo lo relativo al carácter básico que esta ley va imputando en cada uno de los artículos, estoy convencido de que en las enmiendas que hemos presentado diferentes grupos, entre ellos el nuestro, con una mayoría u otra, vamos a conseguir que prosperen estas iniciativas que pueden tranquilizar y poner en su sitio las inquietudes que no sólo planteaba la Senadora Boneta, sino también nosotros, como decía, a través de las enmiendas.

Por lo demás, estamos en contra del veto presentado por la Senadora de Eusko Alkartasuna.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Álvarez Rodríguez.

El señor ÁLVAREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Popular considera que estamos ante una ley necesaria, porque necesario es avanzar en dotar de más transparencia la contratación en la que interviene la Administración Pública, obviamente, como necesario es también acotar en sus límites justos la discrecionalidad de la Administración.

Asimismo, consideramos necesario adecuar esta normativa a realidades de nuestro tiempo, como son las comunidades Autónomas o la Unión Europea. Parece obvio que la todavía actual Ley de Contratos del Estado, con más de 25 años de vigencia, no puede regular con efectividad ni con corrección los contratos administrativos en la actualidad.

Sin embargo, la Ley, tal y como viene redactado el proyecto, no nos satisface al Grupo Parlamentario Popular, como en posteriores intervenciones se dirá. Nuestro deseo es profundizar más en la transparencia y en la indiscrecionalidad de la Administración, y buena prueba de ello son esas 49 enmiendas que presentamos al proyecto, que sin duda colaborarán a esa profundización a que me refiero.

No obstante, el proyecto de ley supone avances, como la publicidad de las licitaciones y las adjudicaciones, como dotar de carácter público al registro de contratos, como eliminar algunos trámites innecesarios, o menos necesarios, digamos, en el procedimiento administrativo para contratar, colaborando por tanto en la simplificación del mismo.

Sin duda, consideramos —y termino ya— que el proyecto puede ser realmente mejorado aceptando una buena parte de enmiendas que, ciertamente, colaborarán en esa profundización, sobre todo, en transparencia y para evitar todo riesgo de irregularidades en la contratación pública.

Por todo lo expuesto, nos opondremos al veto presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Una vez debatido, estamos en condiciones... (*El señor Cercós Pérez pide la palabra.*) Perdón, Senador Cercós, le había excluido; disculpe a la Presidencia. (*Risas.*)

El señor CERCÓS PÉREZ: Gracias, señor Presidente. Ya ve el clamor de protesta delicada y cariñosa hacia la Presidencia. (*Risas.*)

El señor PRESIDENTE: A la que se suma la propia Presidencia, señoría.

El señor CERCÓS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero manifestar a la Senadora de Eusko Alkartasuna que rechazamos el veto rotundamente y que no compartimos su afirmación. Si a la Senadora, «novicia» en la Cámara, le parece poca experiencia que el proyecto haya pasado dos veces por el Congreso y cree que tiene el riesgo de venir empeorado —son palabras suyas que figuran en el «Diario de Sesiones»—, este Senador no puede compartir esa valoración en ningún caso, porque estima que el papel de las Cámaras es enriquecedor de los textos durante toda su tramitación, señoría. Le rogaríamos, pues, que reconsidere ese argumento porque hace escaso servicio a la institución a la que usted pertenece, señoría.

Agradezco a todos los grupos el tono de sus intervenciones. Aquí tenemos las enmiendas presentadas, y haremos el esfuerzo que podamos para recoger algunas de ellas, transaccionar otras a lo largo del trámite y, para las que no aceptemos, podremos dar las argumentaciones que respalden nuestra postura concreta. En particular, nos preocupa, como ponentes, lo referente al tema de competencias de reparto y distribución, y creemos que unos y otros trataremos de lograr el máximo en el tema de las enmiendas, compatible con las sentencias que puedan amparar resoluciones del Tribunal Constitucional o las directivas europeas.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

De todos modos, en el Senado deberíamos ser muy cuidadosos con la experiencia parlamentaria de todo el Estado, incluyendo naturalmente a las Comunidades Autónomas, y no llamar «novicia» a quien ha sido Vicepresidenta Primera del Parlamento vasco.

(*El señor Cercós Pérez: Por supuesto, señor Presidente.*)

El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, señorías, si están ustedes en condiciones, podríamos pasar a votar el veto presentado. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto y procede, por tanto, continuar con el dictamen.

Antes de suspender la sesión, les voy a plantear cómo podríamos proceder esta tarde, siempre que les parezca

adecuado. Tras una consulta con los grupos parlamentarios, en particular con aquellos miembros de la Comisión que han estado en los trabajos de Ponencia, me parece que estamos ante una situación relativamente difícil y que además, como suele pasar, creo que no es achacable en absoluto al intenso trabajo que se ha desarrollado sino, si me apuran — y lo diré en un tono menor, aunque es difícil que ello quede así en el «Diario de Sesiones»— un poco fruto de la asimetría en los plazos temporales con los que hemos de trabajar en ambas Cámaras y fruto también un poco de la presión obvia de incorporar las directivas comunitarias que especificaba con gran conocimiento el Senador Cercós.

En cualquier caso, creo que podríamos llegar a la conclusión compartida de que más que entrar esta tarde en lo que sería el debate muy pormenorizado de las enmiendas, lo cual creo que sería de dudosa utilidad, no ya para los trabajos de la Comisión, sino para el desarrollo del Pleno en su momento, podríamos hacer un análisis donde tratáramos de enfatizar los aspectos políticos o, en definitiva, los que desde los grupos se consideren más importantes para fijar su posición y esperar que, ya fuera del procedimiento de tramitación pero en el terreno de la política en el que siempre estamos trabajando, se mantuvieran los contactos oportunos para procurar que el debate en Pleno nos garantizara lo que en definitiva es nuestra responsabilidad compartida para que se produzca la mejor norma posible.

En este orden de cosas, la propuesta que yo les hago es la siguiente: que procediéramos a un tiempo de intervención por parte de los grupos parlamentarios para el conjunto de las enmiendas a la totalidad de la ley relativamente proporcional —no puede ser de otro modo— al número de enmiendas que se han presentado. Además, la Presidencia, obviamente, accedería gustosísimamente a que ese tiempo fuera compartido, habida cuenta de la amplitud del proyecto de ley.

Con carácter indicativo, podríamos movernos en torno a los 20 minutos de intervención para el Grupo Parlamentario Mixto, 10 minutos para el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, 20 minutos para el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 15 minutos para el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 30 minutos para el Grupo Parlamentario Popular; naturalmente, con la flexibilidad que siempre tiene que regir en un procedimiento de esta naturaleza. Tras el turno en contra, en el que yo procuraría que el Grupo Parlamentario Socialista no fuera más allá de los 30-35 minutos, tendríamos un turno de portavoces. Pero, en cualquier caso, como sus señorías comprenderán, esta Presidencia no está sino para servir su visión respecto del mejor trabajo que podamos hacer respecto del proyecto. *(El señor Pérez García pide la palabra.)*

Tiene la palabra, Senador Pérez García.

El señor PÉREZ GARCÍA: Señor Presidente, sin la responsabilidad institucional que tiene la Presidencia de la Mesa, pero con la representación que ostento del Grupo Parlamentario Socialista, quería compartir mucho más explícitamente una consideración que ha hecho la Presidencia de la Comisión.

A mí me parece que en una ley de esta entidad, para hacer los trabajos de segunda lectura que están encomendados a esta Cámara, que son trabajos que necesariamente hay que hacer con rigor, y para enriquecer el texto remitido por el Congreso de los Diputados, deberíamos haber contado con un plazo notablemente superior al plazo restrictivo de dos meses que figura en el Reglamento de la Cámara y que se apoya en las disposiciones constitucionales. Creo que hay que decirlo porque esta Cámara desarrolla en estos momentos un trabajo, también intenso, de análisis de lo que pueden ser las líneas de reforma constitucional para adecuar el papel de esta Cámara del Senado. Por lo tanto, no viene de más que en la tramitación de leyes, y sobre todo de leyes de especial complejidad técnica y de especial significación política, se ponga de manifiesto esta restricción en los plazos constitucionales a la que nos vemos sometidos.

Por consiguiente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista comparto plenamente la sugerencia del Presidente de la Comisión y hago la sugerencia a los grupos en el sentido de que el plazo de que dispongan para defender sus enmiendas lo centren, bien en las enmiendas que afectan a la filosofía de la ley, enmiendas que significan un planteamiento político legislativo distinto o alternativo al que se deduce del actual texto remitido por el Congreso de los Diputados o bien a las enmiendas que son una auténtica novedad en el Senado. Desde luego, con el más absoluto respeto a la independencia del criterio de los grupos, me parece que es de esta forma cómo la segunda lectura en esta Cámara adquiere una cierta utilidad desde el punto de vista del enriquecimiento de los trabajos legislativos.

Nada más, señor Presidente, en el bien entendido por los representantes de los otros grupos que la posición que he expresado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista es meramente una sugerencia que espero compartan.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La Presidencia entiende que estamos de acuerdo sobre los rasgos básicos.

Las votaciones serán a las seis y media de la tarde en esta misma sala.

Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.

Eran las trece horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Senadores, muy buenas tardes. Se reanuda la sesión.

Según lo previsto, entramos en el trámite de defensa de las enmiendas por el conjunto de los grupos parlamentarios.

¿Grupo Parlamentario Mixto? *(Pausa.)*

¿Alguno de los señores Senadores presentes hace suyas las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Mixto? *(Pausa.)*

Se dan por decaídas.

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado?

Tiene la palabra su señoría.

El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.

Vamos a ver si somos capaces de acabar hoy.

Como saben sus señorías, nosotros tenemos presentadas 13 enmiendas al texto legislativo, que consideramos son de vital importancia porque, entre otras cosas, casi todas ellas están orientadas fundamentalmente al articulado y plantean, más que nada, correcciones que no alteran en absoluto el texto del proyecto en sí. Es más, creo que, de alguna forma, tratamos de enriquecer el texto legislativo. Por lo tanto, no voy a entrar a explicar enmienda por enmienda, y las doy por defendidas en sus propios términos para su debate en el Pleno.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?

Tiene la palabra su señoría.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado 35 enmiendas a este proyecto de ley, que van desde la número 37 a la 71, ambas inclusive, y que tienden a respetar un principio de equilibrio entre la posición hasta ahora —diríamos— de «imperium», de ordeno y mando de la Administración pública, y la de los contratistas, tratando también de aportar una mayor nitidez a la regulación que rige la contratación administrativa. También reseñaríamos nuestro propósito de que se respete la competencia de desarrollo legislativo que tienen algunos parlamentos autonómicos en esta materia, puesto que ciertos preceptos del Reglamento incurren en excesos detallistas, como decíamos esta mañana, que incluso llegan a cuestionar la potestad de autoorganización de las autonomías. También señalábamos ahí que, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se han presentado a este respecto 20 enmiendas, que esperamos que, haciendo nuestras las palabras tanto de la Presidencia como del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cercós, haya opción a que sean objeto de una negociación política durante el trámite parlamentario que queda en esta Cámara.

Me interesa sobremanera señalar que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado tres enmiendas novedosas, y digo novedosas porque no habían sido objeto de presentación ni, por lo tanto, de debate en el Congreso. Son las enmiendas números 61, 62 y 63, referidas a los trabajos específicos y no habituales en el campo de la Administración.

La primera de ellas, la enmienda número 61 —me voy a detener someramente en ésta—, trata de adaptar el período de duración de este tipo de contratos especiales de consultoría y asistencia de servicios específicamente a las

necesidades efectivas de la Administración, de modo y manera que no consignemos en el proyecto un precepto que alude a un plazo determinado de duración de estos contratos, cuando en la práctica se den, posiblemente, múltiples supuestos. Momentos antes de que se celebrase este acto he intentado pensar en algún ejemplo, y me venía a la cabeza el clásico de la valoración de los puestos de trabajo que corresponda a una empresa consultora, que suelen ser contratos que se prolongan a lo largo del tiempo, para visualizar el efecto que la valoración de puestos de trabajo puede tener durante un cierto período de duración, de la relación de puestos de trabajo que en ese momento se aprueba y creemos, sinceramente, que poner un plazo concreto y determinado con un carácter de improrrogabilidad hace poco favor, en primer lugar a la realidad, y escasísimo favor a nuestra capacidad legislativa. Explicaré por qué digo esto último. Pues ni más ni menos porque vamos a consignar, vamos a poner un plazo determinado —cuatro años en principio y seis años con la prórroga—, pero todos sabemos que, superados esos plazos, como muchas veces ocurre en la práctica por la táctica, sin una aquiescencia expresa por las partes, van a continuar vigentes esos contratos. Es decir, vamos a poner un requisito en esta ley que, a pesar de ser incumplido, no va a aparecer tal incumplimiento sancionado bajo ningún aspecto, ni como causa de nulidad ni de anulabilidad ni de rescisión. Por eso pensamos que es mucho mejor adaptarnos a la realidad y ser en este caso suficientemente flexibles.

Cuanto hemos dicho es extensible y predicable a la enmienda número 62, en donde hacemos una referencia específica a los contratos de servicios jurídicos, pero mucho más —y aquí interesa que nos detengamos muy brevemente—, debemos señalar que hay un tipo de contratos que quizá demanden su no tratamiento específico en este proyecto de ley —y ésta ha sido una de las alternativas— o que, si se van a regular dentro de los comprendidos —tal y como yo lo entiendo— en este tipo de contratos específicos y no habituales —y me estoy refiriendo al contrato de defensa judicial, al mandato que otorga la Administración en favor de un abogado y a la representación judicial que confiere la Administración en favor de un procurador—, o bien los excluimos de este proyecto de ley, como digo, o bien no fijamos plazo alguno de duración de estos contratos porque, primero, son contratos basados en la confianza y que deben perdurar, desde nuestro modesto entender, tanto tiempo como duren los pleitos, y aquí nos encontramos nuevamente con la cruda realidad que nos indica que los pleitos pueden durar mucho más de seis años, sobre todo aquellos pleitos de contenido complejo, como son los de naturaleza administrativa, tanto en la vía contencioso-administrativa como en la vía penal, y en donde los sucesivos recursos llevan a plazos de duración ciertamente indeterminados y que en muchas ocasiones superan lo seis años.

Por lo tanto, si me permiten sus señorías, quiero que éste sea un dato a tener en cuenta, que nos permita flexibilizar la regulación que en el proyecto está establecida a este respecto.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina.

El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

En la línea de la intervención de esta mañana, cuando debatíamos el veto presentado por el Grupo Mixto, hemos dicho claramente —y lo diré también al final de mi intervención— que vamos a votar favorablemente el Informe de la Ponencia. Aun así, nuestro Grupo ha presentado una treintena de enmiendas, 29 si no recuerdo mal. Por hacer una intervención que será la única —no voy a señalar nuestra posición respecto a las intervenciones de los otros grupo—, me gustaría, aunque fuera brevemente, poderla centrar en aquellos aspectos que nos interesan más.

Decíamos, y lo reconocemos, que era una ley necesaria; es una ley necesaria, no sólo por los dos años que ha estado —como recordaba el Senador Cercós— dando vueltas en la anterior legislatura por el Congreso de los Diputados, sino porque regula una serie de aspectos que eran del todo necesarios. Si alguna cosa ha llamado la atención a nuestro Grupo es que el debate en esta Cámara se produce en unas circunstancias un tanto apretadas, y sólo la complicidad del Presidente de la Comisión al hacer hoy la propuesta del tipo de debate que íbamos a realizar durante esta tarde, de alguna forma puede dejar sin un efecto tan duro el hecho de que en algún momento casi se nos podía producir —por lo menos éste es el caso del Senador que les habla— una cierta indefensión ante una ley compleja, y una ley no solamente compleja desde el punto de vista administrativo y de discusión, sino también desde el punto de vista político. Es una ley que, además, para poder recoger las directrices europeas —como esta mañana también se recordaba— era necesaria; racionaliza las obligaciones de las Administraciones públicas de una forma que también era absolutamente necesaria.

Me gustaría destacar lo referente a la incorporación a este beneficio que tendrán las empresas —un beneficio que yo diría más de justicia que de otra cosa— que trabajan con las Administraciones públicas, que sea extensivo tanto a los suministradores como a los subcontratistas. Sé, al igual que los demás ponentes de este proyecto de ley, que la cuestión referida tanto a los suministradores como a los subcontratistas es un debate que en algunos aspectos puede parecer que sean menor, pero estoy convencido que tiene un profundo calado y, en este sentido, nosotros, que introdujimos esta enmienda en el Congreso de los Diputados, estamos dispuestos, señor Cercós, a escuchar sus argumentos para intentar encontrar alguna solución que pueda satisfacer a la mayoría o a casi todos los grupos presentes en esta Cámara.

Más allá de esto, por lo que se refiere a los temas de legislación básica y que pudieran perjudicar o incluso herir la legislación propia de las Comunidades Autónomas, tengo que decirles, señores Senadores, señores de la mayoría, que en estos aspectos vamos a ser lo más duros posibles; es decir, todo aquello que pudiera tener una consecuencia desfavorable para las Comunidades Autónomas

vamos a intentar debatirlo con la máxima fuerza posible para que prosperen nuestras propuestas.

Del conjunto de las 29 enmiendas, son nuevas las números 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 153. Son enmiendas que aparecen de nuevo, fruto de negociaciones y conversaciones, formando parte de la obligación que también tenemos los legisladores de escuchar a las partes afectadas. Esas enmiendas nuevas, que aparecen por primera vez nos parecen del todo necesarias. Seis que no fueron aceptadas en el Congreso, por su propio contenido y porque pensamos que debemos defenderlas también hasta el último momento, hacen referencia a las enmiendas números 150, 151, 152, 154, 161 y 163. Ocho más, que prácticamente se podrían resumir en una, como ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, son las que hacen referencia a la Disposición final primera; pretenden incluir una serie de artículos que, de no hacerlo, creo que quedarían desprotegidas las Comunidades Autónomas en su derecho de poder legislar sobre la materia. Anunciamos que, si se nos admiten nuestras enmiendas en el momento en que esto sea oportuno, que será en el debate en el Pleno, nos sentiremos muy satisfechos, pero si no encontramos un punto de acuerdo con el Grupo de la mayoría, casi con toda seguridad votaríamos favorablemente las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en todo lo que hace referencia a la disposición final primera.

El resto de las enmiendas surgen también de nuevo por nuestra parte en esta Cámara, y en su conjunto van dirigidas a dar un contenido más claro, incluso en algunos aspectos más técnicos, que nos parece del todo necesario defender también hasta las últimas consecuencias. Vamos a tener posiciones, si se me permite, férreas, duras o de mayor convicción en todo aquello que haga referencia la adicional sexto, en todo lo que haga referencia al artículo 116 y, como decía antes, en la disposición final primera.

Para terminar, señor Presidente —me he comprometido a que mi intervención sería breve y única—, quiero recordar, como he dicho al principio de mi intervención, que vamos a votar favorablemente las propuestas que se nos hace en el informe de la Ponencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene su señoría la palabra.

El señor ÁLVAREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Intentaremos no consumir el tiempo de 30 minutos que nos había asignado la Presidencia.

Voy a defender las 49 enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley. En la mayoría de ellas, cuando sean simplemente mejoras técnicas, no vamos a profundizar.

Me voy a referir, ya entrando en cuestión, a la enmienda número 86 diciendo que para el Grupo Parlamentario Popular las dos grandes cuestiones generales que plantea este proyecto de ley, que ofrecen una serie de dudas importantes que habría que matizar y despejar, son, en primer lugar, el ámbito de aplicación de la ley y, en segundo lugar, los

justos límites que han de establecerse a la discrecionalidad de la Administración a la hora de contratar.

El artículo 1 está redactado de forma tal que no se regulan una serie de contratos del sector público, aquellos contratos correspondientes a entidades financiadas con fondos públicos, creadas con objetos específicos y, en todo caso, dependientes del sector público. En el Grupo Parlamentario Popular no nos parece honesta ni justa ni, por lo tanto, aceptable esta, a decir de algún autor, huida del Derecho administrativo en algunos supuestos.

Los entes públicos sometidos al Derecho privado no quedan bien regulados en cuanto a la celebración de estos contratos, si no se acepta la enmienda número 86 que plantea el Grupo Parlamentario Popular. Nuestra enmienda pretende que los entes instrumentales dependientes del sector público queden sometidos a la presente regulación en lo referente a la zona común de los contratos públicos. La preparación y formas de adjudicación del contrato en estos entes instrumentales han de quedar sometidos a su regulación por esta ley si realmente existe por parte del Grupo o grupos que apoyan al Gobierno de la nación auténtica voluntad de evitar posibles irregularidades en la contratación pública. Además de evitar esas irregularidades aceptando esta enmienda nos adaptaríamos más a la legislación comunitaria y también, cómo no, a la legislación de la norma suprema, nuestra Constitución, que en sus artículos 1, 9.3 y 103 hace referencias que no voy a reproducir pero que han de cumplirse a la hora de redactar todo proyecto de ley y, por supuesto, el que nos ocupa. Con esto doy por defendida la enmienda número 86, que a nosotros nos parece de una importancia vital.

La enmienda número 87 es de mejora puramente técnica y queda defendida en sus justos términos.

La enmienda número 88 también es una mejora técnica en cuanto a que han de aplicarse las normas, no sólo los principios de esta ley, lo cual parece obvio y no ofrece dudas, por lo menos para nosotros.

La enmienda número 89 intenta matizar más las garantías de los derechos de los particulares que, si bien quedan bastante reconocidos, intenta, como digo, una matización más extrema.

La enmienda número 90, relativa al artículo 10.2., también es puramente técnica; se trata de sustituir la palabra «promoverá» por «propondrá».

Si la enmienda número 91, relativa al artículo 11.2., se tiene en cuenta, no cabe duda que dotaremos de más garantías antidiscrecionales en la contratación, que es, como decía en un principio en la exposición general y hablando del artículo 86, precisamente uno de los dos grandes bloques que nos preocupan: evitar la discrecionalidad y el ámbito de aplicación de la ley. Consideramos que con esta enmienda dotamos de más garantías antidiscrecionales a la contratación.

La enmienda número 92 también es puramente técnica. Es un error gramatical simple.

La enmienda número 93, relativa al artículo 15.3., la damos por defendida en sus justos términos.

La enmienda número 94 se refiere al artículo 16.2. Consideramos que la redacción de este artículo afecta inadmi-

siblemente a la seguridad jurídica, otorga libertad y discrecionalidad, justamente lo contrario a los principios con los que debemos dotar a esta ley, que son siempre rigor y seguridad jurídica. Por lo tanto, se pide, a través de esta enmienda, que se suprima el párrafo correspondiente al artículo 16.2.

La enmienda número 95 la damos por defendida en sus justos términos, igual que la enmienda número 96 y también la enmienda número 97, que es una simple mejora técnica.

La enmienda número 98 también la damos por defendida en sus justos términos, igual que la enmienda número 99. (Me pararé, como había dicho al principio de mi intervención, solamente en aquellas cuyo fondo, insisto, se base en esas dos grandes cuestiones.)

La enmienda número 100, al artículo 21.3., se refiere a cubrir todas las garantías, o sea que la prohibición para contratar es un acto grave, no cabe duda; debe haber hechos graves que conlleven a originar esa prohibición para contratar. Exigimos, a través de esta enmienda, que se cubran todas las garantías.

La enmienda número 101, relativa al artículo 22, supone una mejora técnica. Creemos necesario consignar expresamente no sólo la nulidad del contrato, sino la responsabilidad de las personas intervinientes.

La enmienda número 102, relativa al artículo 25.3., se justifica con exigir un contraste de objetividad en la aplicación de una excepción. Entendemos que debe quedar constancia en el expediente de contratación el informe previo de la junta consultiva, por tratarse precisamente de un supuesto excepcional.

La enmienda número 103, relativa al artículo 29.1., también la damos por defendida en sus justos términos.

La enmienda número 104, correspondiente al artículo 36, la defendemos en sus justos términos.

La enmienda número 105, relativa al artículo 41, es una pura precisión técnica.

La enmienda número 106, relativa al artículo 51, intenta la coordinación y la congruencia con el artículo 49.1. Si sus señorías repasan la lectura del artículo 49.1., y para que haya una concordancia, esta enmienda debería aprobarse.

La enmienda número 107, relativa al mismo artículo 51, la damos por defendida en sus justos términos.

La enmienda número 108, relativa al artículo 62 del proyecto de ley, intenta reforzar el principio de legalidad; está claro que lo que se pide son mayores garantías y exigencia de responsabilidades.

La enmienda número 109, relativa al artículo 65, es de modificación. La rúbrica del artículo debe decir: «Artículo 65. Declaración de invalidez»; y en la primera línea del apartado 1 cambiar «nulidad» por «invalidez». Entendemos que se le otorga una consideración más técnica.

La enmienda número 110 es en coherencia con la anterior, trata sobre lo mismo.

La enmienda número 111 se refiere al artículo 73.1.a). Queremos que se promueva la publicidad como garantía de transparencia, lo cual reviste una consideración y una importancia trascendental para este proyecto de ley, según

el Grupo Parlamentario Popular. Entendemos correcto dar cumplimiento del acuerdo en relación a la resolución de tramitación de emergencia al Consejo de Ministros, pero entendemos también que en ese trámite de emergencia la transparencia es fundamental. Por tanto, el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros dándose por enterado del acuerdo en cuanto al trámite de emergencia, ha de ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en un plazo no superior a 15 días. El texto de esta enmienda es fundamental, y debería, a nuestro modo de ver, incorporarse al articulado de la ley.

La enmienda número 112, relativa al artículo 73, pretende crear un artículo 73 bis nuevo con el fin de dotar de transparencia al contenido de los diferentes expedientes de contratación. En el punto 1 se exige que figuren documentadas las justificaciones de todos los datos exigibles por la propia ley. En el punto 2, el que los expedientes estén foliados correlativamente por fechas, otorgará, sin duda, una seguridad administrativa para la partes contratantes. Esto, juntamente con la dotación de la correspondiente publicidad administrativa otorga al proyecto unas necesarias garantías.

La enmienda número 113, relativa al artículo 74.4, la consideramos de una obviedad absoluta, por lo que queda defendida en sus justos términos. Se refiere a esos principios fundamentales de evitar una discrecionalidad arbitraria de la Administración.

En la enmienda número 114, relativa al artículo 89.2, conviene precisar que se atiende a los criterios del artículo 86.

La enmienda número 115, correspondiente al artículo 93, la retiramos porque recoge más o menos lo mismo que el artículo 76.

La enmienda número 116, relativa al artículo 100.4, es una simple corrección gramatical, una mejora técnica. Pretende que en vez de decir 1,5 por cien, diga 1,5 puntos.

La enmienda número 117 también es una corrección gramatical al artículo 108, que damos por defendida.

La enmienda número 118, respecto al artículo 115.1 y 2, es obvia: si se habla de derechos, hay que hablar de derechos y obligaciones. Por tanto, también la damos defendida en sus justos términos.

La enmienda número 119, al artículo 117.1, es una mejora técnica.

La enmienda número 120, al artículo 124.1.a), también es una mejora técnica, igual que la enmienda número 121.

La enmienda número 122, correspondiente al artículo 144, se justifica porque es irracional un número cerrado de acontecimientos específicos como causa de fuerza mayor, y van en contra de los criterios generales del derecho; parece obvio. Al hablar de cualquier acontecimiento que pueda sobrevenir no se puede nunca hablar de «*numerus clausus*»; la relación de fenómenos naturales no obedece a ciencias exactas, puede haber otros no previstos, y eso es lo que pretende corregir esta enmienda.

La enmienda número 123 trata de una simple mejora técnica.

La enmienda número 124, al artículo 148.2, está en coherencia con el artículo 100.4; al hablar del interés legal habrá de hablarse de 1,5 puntos.

La enmienda número 125, relativa al artículo 152, es un intento de defender al contratista al indemnizarle los daños y perjuicios causados.

La enmienda número 126, correspondiente al artículo 160.1^o, pretende que la forma de adjudicar el contrato de gestión de servicios no excluya la subasta. No deben alterarse los criterios de adjudicación, de tal manera que habrá de respetarse el régimen general de las formas de adjudicación de los contratos sin excluir, como digo, la subasta.

La enmienda número 127 es una mejora técnica del artículo 169.2.

La enmienda número 128 es una enmienda de supresión del artículo 181, puesto que no vemos razones para crear un régimen especial para el contrato de suministro.

La enmienda número 129, correspondiente al artículo 194, propone añadir en el párrafo primero, después de «*dará lugar*» la expresión «*a la indemnización de los daños y perjuicios causados*». Se trata de respetar la realidad del daño, puesto que el daño contractual siempre ha de dar lugar a indemnizar daños y perjuicios, cosa que parece que no ofrece duda.

La enmienda número 130, correspondiente al artículo 194.2 y 3, es de supresión para respetar la realidad del daño, la indemnización ha de basarse en los daños y perjuicios causados sin establecimiento de límites favorables para la Administración.

La enmienda número 131, el artículo 209.2 y 3, también de supresión, la damos por defendida en sus justos términos, igual que la enmienda número 132, que lo que hace es reiterar las anteriores enmiendas 128, 129 y 130.

Por último, las enmiendas números 133 y 134, las damos por defendidas en sus justos términos. La número 134 coincide con alguna presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, a la cual se refería el portavoz de dicho Grupo parlamentario.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el Senador Cercós.

El señor CERCÓS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar quiero decir que entregaremos a la Mesa, para que se incluya, un escrito con las correcciones técnicas que no pudimos entregar en Ponencia. Son meras mejoras gramaticales o de estilo que entregaremos por escrito y daremos copia a todos los grupos.

Pasamos a analizar el conjunto de las enmiendas. Sin entrar en su desarrollo, porque tampoco lo han hecho sus señorías, procuraremos hacer algunas referencias.

Al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, que ha sido el primero que ha defendido sus enmiendas, quiero decirle que hemos presentado una enmienda transaccional con su enmienda número 74.

En segundo lugar, hay un paquete de enmiendas, quizá el más importante, que también es común con el Grupo Parlamentario Mixto, con el representante del Eusko Alkartasuna, que recoge el escrito de peticiones hecho por la Federación de Municipios. A todas ellas podremos dar res-

puesta en su momento, pero lo que podemos señalar ya es que los municipios no tienen competencias para esos temas que se plantean, es decir que constitucionalmente carecen de esas competencias. Sin embargo, se podrían hacer otras consideraciones, porque plantean diferentes puntos de vista respecto al dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.

Entendemos que la participación es la que ya se está estableciendo en la norma como competente —el proyecto de ley ha sido informado por el Consejo Superior— y que, en cambio, la Federación de Municipios carece realmente de esa competencia. Pueden ver sus señorías que —por poner un ejemplo, la enmienda número 75, al artículo 27, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado— todas las enmiendas se podrían refundir en una misma justificación. Es decir, la Federación Española de Municipios y Provincias, por su propia naturaleza, no puede intervenir en esos asuntos pues es una asociación de carácter voluntario; no es una asociación permanente, en cuanto a su representatividad, sino que es susceptible de perderla, con lo que por esa vía no quedaría garantizado el derecho a intervenir por parte de los municipios. Éstos lo tienen reconocido en sus propias normas, pero no la propia Federación de Municipios en los aspectos que se solicitan, como, por ejemplo, para la contratación pública. Sucede lo mismo, repito, con la enmienda 75 y forma el paquete más esencial de sus señorías, común con Coalición Canaria —me gustaría que lo vieran con atención—: se solicita la previa audiencia de la Federación Española de Municipios y Provincias para la contratación y, hasta este momento, no hay articulado. Es decir, es una organización acogida al Derecho privado; como tal, no es una colegiación oficial, un colegio profesional, como lo pudiera ser una corporación de derecho público, y no tiene reconocida capacidad para poder ser informante.

La enmienda número 76, al artículo 29, solicita añadir, en el punto 1, tras «... Las Comisiones clasificadoras, cuya composición se determinará reglamentariamente, estarán integradas por...», la expresión «... representantes de las diferentes Administraciones públicas...». Se trata de la comisión para efectos de la junta consultiva. El que intervinieran las 17 Comunidades tampoco supondría la eficacia de ese organismo. En los términos en que está planteado creemos que puede ser mucho más eficaz, y es suficiente la coordinación entre la junta consultiva y los organismos que se puedan crear en las propias Comunidades Autónomas.

Seguiremos estudiándolas, pero, en principio, tenemos razones de fondo para rechazarlas.

Por ejemplo, en la enmienda número 82 se solicita suprimir el dictamen del Consejo u órgano consultivo equivalente en la Comunidad Autónoma respectiva, pero dicho órgano no existe. El Consejo de Estado es órgano único a nivel estatal; no hay órgano equivalente, por lo que no se puede plantear, aunque con mucho gusto lo intentaríamos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, trataremos de estudiar con profundidad todo lo que se refiere a los temas competenciales. Ya ha sido aceptada una enmienda transaccional. Posteriormente tendremos la posibi-

lidad de aclarar otros temas más competenciales. Por ejemplo, la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se refiere a la letra a) del apartado 2 de dicho artículo, y una enmienda socialista suprime este apartado. Por tanto, sin entrar en más consideraciones, esa enmienda se refiere realmente a un artículo que ya está incorporado en Ponencia con una enmienda socialista.

La enmienda número 40, al artículo 20.3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, es de supresión. Creemos que es una errata, porque parece que debe referirse al artículo 21.3; hay otra enmienda a ese mismo artículo.

Estoy aclarando las incidencias para que quede constancia.

La enmienda número 45 se refiere al artículo 34, pero su propio texto está ligado, en la línea tercera, con el artículo 27, párrafo tercero, letra e), por lo que tampoco tiene cabida, ya que dicho apartado ha sido suprimido con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto a la enmienda número 47, nos gustaría llamar la atención al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Puede comprobar que lo que dicha enmienda plantea ya está recogido en la enmienda número 239, del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que ya está aceptada.

En lo que se refiere al resto de las enmiendas presentadas, creemos que se debatirán en el Pleno de la Cámara; por razones de tiempo, no entramos ahora en su discusión, pero realmente o están ya satisfechas en las enmiendas que nosotros presentamos o hay alguna concreta que necesitaría alguna aclaración. Hay enmiendas en las que, por ejemplo, se pide transferencia de artículos a la disposición final, como la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* y por el Grupo Parlamentario Popular. Las estudiaremos a fondo, y las dejamos para el Pleno pues en este momento no vamos a entrar en la discusión de esos aspectos.

Sin embargo sí queremos señalar al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos —para que lo vaya comprobando su señoría— que algunas de sus enmiendas son contrarias a los propios artículos de la Directiva, como la número 37, al artículo 17. Dicha enmienda dice: «Asimismo, podrá el empresario acreditar su solvencia técnica por cualquier otro medio considerado suficiente por la Administración contratante.» Dicho artículo, tal y como está presentado en el cuerpo del proyecto de ley que debatimos, es la transposición del artículo 26 de la Directiva 71/305 de la Unión Europea que, realmente, no autoriza otros medios de acreditación; es taxativo. Por tanto, se ha procurado uniformizar en ciertos temas, para que a las empresas españolas que tengan que acreditarse en el exterior, cuando concurran a concursos de otras naciones, no se les planteen ningún elemento de acreditación distinto que el que se pida en España. Por tanto, creemos que en este aspecto tiene que haber una homogeneidad.

La enmienda número 41 es de supresión. Sus señorías pueden comprobar que de lo que se trata es de dar competencia en un tema claro, para ejercitar una función, al pro-

pio Ministerio de Economía y Hacienda. No hay invasión de competencias de las Comunidades, ya que las competencias actuales figuran en el actual reglamento de contratación del Estado.

Sobre la enmienda número 42 se ha hecho una transaccional, que creemos que da satisfacción plenamente.

La enmienda número 43, como he dicho, está afectada por la enmienda socialista que pide la supresión del apartado.

La enmienda número 44 propone «... para los contratos que celebren los órganos de contratación de las Comunidades Autónomas y sus organismos autónomos, los acuerdos sobre clasificación y revisión...». Pensamos que no hace falta necesidad, puesto que la ley es concreta, ya que el artículo al que se refiere, que es el 29.3, dice que serán de aplicación las disposiciones de desarrollo de la ley. Por tanto, incluye tanto las leyes estatales como las leyes de la Comunidad Autónoma.

Ya he comentado que la enmienda número 45 se soporta sobre el artículo 27, párrafo tercero, que está retirado.

La enmienda número 46 plantea que pase a la disposición final primera el artículo 59. Ahí tengo que señalarle claramente las competencias que tiene la Administración general del Estado, que es la competente para enviar la información sobre contratos, a los efectos del cumplimiento de la normativa internacional. Hay una Sentencia del Tribunal Constitucional, que puede mirar su señoría, la 172/1992, que se refiere a ella y dice que le corresponde facilitar la información, si bien habrá de hacerlo a través del conducto que determine el Estado, a quien corresponde no sólo la relación directa con la Comisión —se entiende la Europea—, sino también aunar las diversas informaciones que reciba de los restantes entes autonómicos, para facilitar a la Comisión, como un todo y no separadamente, la información por ella solicitada.

La enmienda número 47 está afectada por la enmienda número 239 del Grupo Parlamentario Socialista.

Seguiremos estudiando la enmienda número 48.

La enmienda número 49 plantea sustituir el texto por otro del siguiente tenor: «El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia del empresario, seleccionará a los concurrentes e invitará a los admitidos.» Creemos que este artículo es básico y procede textualmente de las directivas europeas. Está declarado básico, no supletorio, porque es transcripción de un artículo de las directivas; las mismas a las que he aludido esta mañana.

Vamos a seguir estudiando la enmienda número 51.

Las siguientes enmiendas se refieren preferentemente a las disposiciones adicionales y las vamos a estudiar con todo interés. Con esto, he dado respuesta a algunas enmiendas, por lo que se aligerará el debate en el Pleno de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: ¿Puede entender la Presidencia que ha terminado su señoría?

El señor CERCÓS PÉREZ: No. Quedan las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Atiéndalas como se merecen, señor Senador.

El señor CERCÓS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, excepto la que vamos a estudiar ampliamente y con todo interés, tengo que decir que presentan aspectos sobre los que podríamos cambiar impresiones, para ver si podemos encontrar posibles puntos de coincidencia. Lo mismo ocurre con las del Grupo Parlamentario Popular. No obstante, es imposible coincidir en algunas de ellas.

La enmienda número 164, por ejemplo, pretende adicionar un nuevo apartado al artículo 15. Creo que la idea, si su señoría lo examina con rigor —por no entretenernos, no voy a leer el texto—, ya está contemplada en el texto del proyecto.

La enmienda número 163 dice lo siguiente: «Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos tres años...» En el texto de la ley se fija el límite en cinco años, lo que quiere decir que se pueden presentar las obras referidas a uno, dos, tres, cuatro años. Por tanto, es más completo el texto de la ley. Puede comprobarlo su señoría.

La enmienda número 162 dice: «En los contratos de obras no hallarse al corriente en el pago...» Su contenido entra, en una ley que es puramente administrativa como esta de contratos que estamos estudiando, en el campo de las relaciones civiles, acogidas al Derecho privado. Creemos que no se puede hacer esa intromisión, porque tiene un carácter civil y ajeno a la Administración el tema que plantea su señoría.

La enmienda número 161 dice que se suprima del artículo 24, apartado 1, la expresión «en escritura pública». Sugieren que después de que haya una agrupación de empresas no se exija escritura pública. Parece oportuno que se exija, ya que hay un cambio de personalidad jurídica, para que quede convalidada la personalidad jurídica, aunque no sea más que por esto. Estoy convencido de que en muchos países de la Unión Europea esto tiene que ser un requisito esencial. ¿Cómo se certifica que una empresa que se presenta como fruto de una agrupación de empresas es una empresa con capacidad y con todas las condiciones si no tiene reconocida, por lo menos acreditada, ante escritura pública la formación de la agrupación? Pensamos que lo deben estudiar sus señorías y comprenderán nuestras razones.

La enmienda número 160 está afectada por una enmienda transaccional.

En cuanto a la enmienda número 159 —hay otra enmienda, la misma que hemos afectado con una transaccional, que procede de la escisión de sociedades— entra en aspectos muy particulares, que pueden y deben resolverse de manera práctica en la tramitación del expediente. En este momento no hay que hacer una referencia expresa.

La enmienda número 158 lo es a los efectos de suprimir «...de conformidad con los artículos 121, 177 y 202...» Su señoría propone que se suprima la definición de los artículos relativos a los contratos menores. El tema está claro por

la Sentencia del Tribunal Constitucional número 141/1993, a la que remito a su señoría. Si su señoría mira la Sentencia, a lo mejor no hace falta volver a plantearlo.

La enmienda número 157 ya ha quedado corregida con las enmiendas que hemos presentado nosotros, puesto que la cifra del límite superior no es básica. Esta enmienda lo es al artículo 92 y puede comprobar su señoría que la mínima sí es básica, pero la máxima no. Para la mínima, tiene la Sentencia 141/1993, para comprobar que los límites inferiores sí son, en todo caso, los que garantizan la igualdad y no quiebran el principio de esa igualdad. Por tanto, para plantear un marco equitativo hay que mantener la mínima, pero la máxima no queda y está en las enmiendas presentadas; esto pasa a tema supletorio propio de las Comunidades Autónomas.

Estamos de acuerdo con la enmienda 156, pero sin los incisos, pues esto lo desarrollábamos en la ley con la enmienda de su Grupo que aceptamos a los apartados 5 y 6 del artículo 113. No podemos aceptar la última parte del apartado 5, creemos que es impropio, pues dice: «sin que sean de aplicación los requisitos previstos en el artículo 115 de la presente Ley». Precisamente en los casos de fusión no entran en juego los del 115, como puede comprobarlo su señoría. Por tanto, no hay que recoger la declaración. En el segundo, que alude a los supuestos de escisión, sí juega, y no debe jugar por la regulación que se da a todo el tratamiento de la cesión de contratos dentro de la propia ley, como puede comprobar su señoría. De todas formas, presentaremos la transaccional para el pleno con estas dos modificaciones.

La enmienda 155 no se puede aceptar porque es muy difícil entrar en los grupos, subgrupos y demás categorías exigibles al subcontratista; es decir, para el contratista sí, pero para el subcontratista, dada la variedad de situaciones que hay, sería muy complejo. En todo caso, se podría abordar reglamentariamente, pero no parece que pueda ser en la propia ley.

La 135 propone el carácter necesariamente estatal a que se remite el apartado 3 del artículo 14. Creemos que esa enmienda ya ha sido aceptada con la redacción que se aprobó en el Congreso de los Diputados. El texto del Senado recoge ya las pretensiones que plantean sus señorías en esa enmienda.

Finalmente, señor Presidente, podemos tener en cuenta la enmienda 86 presentada al artículo 1.3. Nosotros pensamos que con la incorporación de las enmiendas socialistas en el trámite del Congreso de los Diputados se ha dado ya la comprensión máxima a efectos de control de la contratación, a efectos de evitar que se produzcan desviaciones en el ejercicio de la función de contratar. Creemos que esa lista es exhaustiva e, incluso, hay algún aspecto en su enmienda que no tendría cabida aquí; por ejemplo, el apartado c) se refiere a contratos patrimoniales, como puede ver su señoría: «En todo caso, las entidades comprendidas en los anteriores apartados a) y b), ajustarán su actividad...», etcétera. Son contratos patrimoniales que deben quedar comprendidos en la legislación patrimonial de las Administraciones públicas. Por esas razones, no la aceptamos.

La enmienda 89, relativa a que los derechos concedidos a contratistas y subcontratistas en los artículos 100 y 116 sean irrenunciables, creemos que, precisamente, les ata de manos, señoría. Si fueran irrenunciables no habría salida ni para unos ni para otros, y el hecho es que la contratación tiene muchas situaciones que se resuelven por convenio entre las partes de manera fulgurante, de manera inmediata. La redacción del artículo 16, que hemos repartido a sus señorías, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y pretendía respaldar a la parte más débil, a las empresas subcontratistas y a las empresas suministradoras. No obstante, nosotros creemos que ese apartado puede ser mejorado y hemos pedido a todos los colegas de los distintos grupos que lo estudien con el máximo interés. Hoy día, evidentemente, en la relación contractual entre contratista y subcontratista se da con frecuencia que el contratista pague inmediatamente al subcontratista y al suministrador con un pagaré, con una letra o con un documento financiero que se puede convertir automáticamente en dinero, en liquidez para el subcontratista. Y esto no está contemplado en el artículo 116 c). Éste es un tema importante y de ahí que nosotros hayamos pedido a sus señorías que lo analicen con el propósito de hacer una transaccional en el Pleno. Queremos, en primer lugar, que ese apartado contemple exclusivamente las relaciones de precio pactadas entre contratistas, subcontratistas y suministradores, pero referidas a contratos que tengan relación con la Administración pública, precisión que también falta. En segundo lugar, queremos hacer una corrección gramatical que es «con unos y con otros», y, en tercer lugar, que se dé entrada, señorías, a esa posibilidad que es contraria al espíritu de esta enmienda, porque si fueran irrenunciables les ataríamos de manos y les obligaríamos a tener que acogerse a los artículos 100 y 116.2. Nosotros creemos que la mayoría de contratistas, empresas que no explotan, que no distorsionan, que con caciquean, que no manipulan a los subcontratistas y a los suministradores, responden correctamente en la realidad dando documentos de pago que pueden transformarse en liquidez monetaria de forma inmediata. Eso es lo que nosotros proponemos en ese texto que hemos entregado para que sus señorías lo estudien con el máximo interés, porque tendría que ser un texto con el respaldo de todos los grupos para que lo admitan como tal, para que sea un tema asumido por todos. Y por esta razón también rechazamos la enmienda número 89.

La enmienda 90 nos parece incompleta. No siempre habrá propuestas, se trata de promover y no de proponer. Les aceptamos, se lo digo ya de antemano, la enmienda número 92. En la enmienda 93 proponen sus señorías que haya libertad para que el candidato sea quien opte por los medios de acreditación. Yo he contestado al Senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que en el tema de la acreditación tenemos que ser rigurosos y que realmente donde hay arbitrariedad es en la enmienda que proponen sus señorías. Dice en su justificación: «Facilitar la prueba real de la capacidad, eliminando arbitrariedades.» Nosotros creemos que lo que genera arbitrariedades es lo que proponen sus señorías. Si dejáramos los elementos de acreditación variable de forma que el

candidato contratista pudiese optar por aquel o aquellos que estime suficientes iríamos a una ambigüedad absoluta que, además, sería impropia de lo que se plantea, que es tener una ley de contratos que nos homologue con las leyes de contratos de los países de la Comunidad Europea y que nuestras empresas puedan competir por contratos internacionales con unas acreditaciones que sean regularizadas, suficientes e iguales que las de los demás países.

En la enmienda 98, formulada al artículo 20.1, proponen la adición de un nuevo apartado 1 con el siguiente contenido: «1) El incumplimiento por el empresario de sus obligaciones legales respecto a la contratación de trabajadores minusválidos.» Nosotros hemos presentado una enmienda al artículo 20 que creemos que da satisfacción a la petición de sus señorías. En ella introducimos las sentencias en materia de integración laboral de minusválidos. Con esto se recoge el espíritu de lo que plantean sus señorías.

En cuanto a la enmienda número 95, también la aceptamos. Respecto de la enmienda número 96, entendemos que el proyecto de ley no puede descender a todos los cauismos que sus señorías plantean. Exigir que en caso de recurso esté asegurado el pago podría ser contrario a otras normas que también están contempladas en el panorama normativo de nuestro país. Creemos que eso no debe ser contemplado en la ley.

También aceptamos la número 97. En cuanto a la número 99, creemos que no es aceptable ya que en el supuesto contemplado en el artículo 29.d) siempre se exige una declaración. Es decir, no puede apreciarse de manera automática. La misma argumentación valdría para la enmienda número 100.

En cuanto a la número 101, consideramos que resulta muy delicado introducir causas de nulidad, que deben ser tasadas, como se recoge en los códigos respectivos y asimismo en el propio proyecto de modificación del Código Penal. Es decir, que se hace referencia expresa de ello. Por otra parte, en la modificación del Código Penal que está en discusión no se hace referencia tampoco a irregularidades de funcionarios puesto que existe una regulación especial en la Ley de régimen de las Administraciones Públicas donde se estudia todo este tema.

En cuanto a la enmienda 102, señorías, el que se proponga que el informe de la Junta Consultiva sea favorable, cuando también se está hablando de autorización por el Consejo de Ministros, supone que ustedes se están anticipando puesto que al ser favorable ese informe se convierte en vinculante. Es decir, ustedes lo están anteponiendo a lo que plantea el artículo 24.3 del proyecto, a la capacidad decisoria que precisamente tiene el Consejo de Ministros.

Respecto de la número 103, en la que solicitan que tras el párrafo: «... produciendo tales acuerdos efectos ante cualquier órgano de contratación...», se añada la expresión: «de la Administración General del Estado.», tengo que decir que hay sentencia del Tribunal Constitucional contraria a esto. Lo que sus señorías pretenden es que las clasificaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, teniendo efecto ante todas las Administraciones públicas, no tenga efecto más que ante la Administra-

ción del Estado. Sin embargo, señorías, si consideran ustedes la sentencia número 331/1993, del Tribunal Constitucional, verán que existen competencias que por su naturaleza desbordan de las que son propias e inherentes al órgano contratante. Esto es lo que sucede con las facultades de suspensión de las clasificaciones de los contratistas. El hecho de ser facultades que afectan a los intereses de los contratistas y más genéricamente a las condiciones generales de contratación administrativa y al desarrollo de las actividades económicas privadas en régimen de libre competencia, realmente hace que sea constitucionalmente legítima la decisión del legislador de atribuir su ejercicio a un órgano estatal. Si lo desean sus señorías, pueden comprobarlo.

Aceptamos su enmienda número 105. En cuanto a la número 106, al incluir: «... previo informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa...», están anteponiendo ustedes la capacidad decisoria a la del Consejo de Ministros.

En cuanto a la número 107, creemos que no es preciso incluirla. Sus señorías pueden comprobarlo. El tema que ustedes plantean está resuelto en la disposición final segunda. 2. Repito que si sus señorías son tan amables de comprobarlo, podrán ver que no es preciso incluir la enmienda número 107.

En referencia a la número 108, y como ya he indicado, esta ley no es reguladora de responsabilidades de los funcionarios. Por tanto, no es procedente que esto se recoja aquí.

A la enmienda número 109, en la que proponen sus señorías que se cambie la palabra «nulidad» por «invalidez» en la rúbrica del artículo 65, tenemos que decirles que la denominación que nosotros proponemos es la tradicional en el Derecho Administrativo español y, por supuesto, la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, también utiliza la misma palabra que respaldamos nosotros, es decir, «nulidad», como figura en el proyecto de ley.

En la enmienda número 111 proponen añadir un nuevo párrafo donde se haga mención de un acuerdo de aceptación, pero no se trata de un acuerdo de aceptación sino de poner en conocimiento. Por tanto, no podemos aceptar este aspecto de la enmienda ni tampoco el que se refiere a su publicación en el «Boletín Oficial».

En cuanto a la número 112, sin discrepar de algunos de los elementos que recogen sus señorías al proponer la adición de un nuevo artículo 73 bis, consideramos que se trata de una propuesta que debería dirigirse más hacia el reglamento. Ustedes abordan puntos muy particulares en referencia a la selección de contratistas, concurso o concurrencia y a los propios expedientes de contratación que nosotros consideramos aspectos más propios de un reglamento.

En cuanto a la número 113, la consulta a tres empresas está ya prevista en el artículo 92. Creemos que esta enmienda no aporta nada, aunque podríamos verla más despacio.

Aceptamos la enmienda número 114, pero con una corrección ya que hay un error en el texto. Cuando se refiere

el texto de la enmienda al artículo 86 debe decir artículo 87, que, como pueden comprobar sus señorías, es donde se habla de los criterios establecidos para la adjudicación del contrato. Aceptamos también la número 116.

En cuanto a la número 117, comprueben sus señorías que es correcta la expresión «estos últimos» que aparece en el texto del proyecto, ya que se refiere a los índices de precios correspondientes al período real de ejecución y no al coeficiente. Por tanto, no es correcta la enmienda que plantean sus señorías. Aceptamos también sus enmiendas números 118 y 119. Respecto a la enmienda número 133, le tenemos que decir que no es procedente su inclusión porque la Comunidad Europea está preparando un proyecto para todo el tema de las nuevas tecnologías que se llama el SIMAC —sus señorías pueden solicitar los borradores—, que será el que contemple lo que sus señorías, yo no digo que sin acierto, sugieren que se incluya aquí, por lo que parece procedente que esperemos a que la Comunidad Europea nos mande el correspondiente proyecto, que se está estudiando en procedimiento abierto, es decir, que España tiene posibilidades de comparecer y así lo hará. Ésta es la última enmienda a la que me voy a referir, porque la enmienda a la disposición final primera, como he señalado, vamos a estudiarla junto con las presentadas por otros grupos políticos.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias. El resto de las enmiendas serán contestadas por mi compañero, el Senador Aguilá.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Aguilá.

El señor AGUILÁ I BARRIL: Gracias, señor Presidente, intervendré con brevedad para contestar a todas las enmiendas presentadas al Libro II, respecto al cual ha quedado totalmente sin explicar nuestra posición a los demás grupos.

Toda vez que el representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no está aquí, simplemente diré que discrepamos de sus valoraciones, pero no entraré a pormenorizar sus enmiendas y en el trámite del Pleno ya daremos las respuestas correspondientes. Sí daremos respuesta a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario Popular siguiendo el orden de los títulos correspondientes a este Libro II de la Ley.

Aceptamos la enmienda número 120, del Grupo Parlamentario Popular, puesto que es una mejora técnica, así como la número 121.

Señor Codina, no podemos estar de acuerdo con la enmienda número 154, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, puesto que nosotros entendemos que son distintos los supuestos de concesión de obras públicas y gestión de servicios públicos; la concesión de una obra pública es prácticamente idéntica a un contrato de obras, por lo que cae dentro de la normativa de este último, como así lo refleja la Directiva correspondiente, la 93/37, de la que este artículo es una fiel transpo-

sición; por el contrario, el contrato de gestión de servicio público, aparte de no estar regulado por la Directiva, supone que un servicio público titularidad de la Administración se preste por particulares, por lo que puede admitirse que la Administración acuda a formas organizativas propias, entes públicos o sociedades públicas, sin sujetarse a esta Ley. En último caso, la enmienda podría plantearse en relación con el artículo 155 para no excluir a estos entes y sociedades públicos de la aplicación de la Ley en la gestión de servicios públicos.

Entiendo que las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya han decaído, por lo que no voy a entrar en las mismas.

Vamos a aceptar la enmienda número 153, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, aunque hay un error gramatical que hay que corregir: no sé si se han dado cuenta de que no son «las penas se ejecutarán», sino «las obras se ejecutarán».

El señor PRESIDENTE: Hay una cierta diferencia.

El señor AGUILÁ I BARRIL: Sí, señor Presidente, hay una cierta diferencia.

En cuanto a la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular mantiene al artículo 144, nosotros entendemos que el suceso imprevisible, insuperable, ajeno a la voluntad y actuación del contratista, no basta para calificar al supuesto como de fuerza mayor; en este sentido, todos los daños causados por terceros serían indemnizables. La finalidad del precepto es la enumeración taxativa de los supuestos de fuerza mayor con la consecuencia de indemnización del contratista que produce, eliminando fórmulas como la que figuraba en la anterior Ley de Contratos del Estado, que recogía la expresión «casos análogos».

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene también una enmienda al artículo 146, apartado 1, la número 152. Nuestro Grupo entiende que la posibilidad de indemnización resulta de la redacción actual al excluirse sólo en el apartado 1 los supuestos de supresión o reducción de obras, aunque más que a indemnización el precepto debe referirse al pago de modificados, expresamente previsto en el apartado 2. Por otra parte, la reforma gramatical que se propone de incluir «aquellas» parece estar en contradicción con el propio concepto de modificación, que la mayor parte de las veces hará referencia a obras no comprendidas en el contrato.

Aceptamos la enmienda número 123, del Grupo Parlamentario Popular, por entender que mejora técnicamente el texto. Igualmente, aceptamos la enmienda número 124, también del Grupo Parlamentario Popular. No así la número 125, que es muy parecida a una que presenta también Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ya que entendemos que la expresión «indemnización de daños y perjuicios» es una cuestión que por su propia naturaleza queda siempre —la práctica nos lo dice— remitida a la concreta determinación de los órganos jurisdiccionales, por lo que se estima más beneficioso para todos, Administración y contratistas, el establecimiento de indemnizaciones tasadas que pueden percibir inmediatamente al estar estableci-

das en la Ley, lo que no ocurriría si tuvieran el carácter aleatorio y dilatado en el tiempo que supone la fijación de la indemnización por órganos jurisdiccionales.

En el Título II de este Libro, *Convergència i Unió* tiene una enmienda al artículo 159, apartado 2, pero entendemos que es mejor la redacción que presenta el proyecto de ley por ser más completa la remisión del texto del proyecto, que comprende los supuestos de que el concesionario sea una Administración pública o un particular, y no la efectuada al artículo 133, que comprende exclusivamente este último supuesto.

Respecto a la enmienda número 126, del Grupo Parlamentario Popular, entendemos nosotros que la opción del proyecto establece un criterio que ha sido positivo en su aplicación y que comporta suficientes elementos de control y objetividad. En este tipo de contratos que tratan de gestionar un servicio público la subasta no puede estar sometida solamente a un precio, sin tener en cuenta otros elementos que puede ofertar.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* mantiene la enmienda número 150 al artículo 163, con la que tampoco estamos de acuerdo. Por la especial naturaleza de estos contratos no parece oportuno remitir la concreta manera de efectuar la revisión a lo establecido para otro tipo de contratos, en concreto para los de obras; aparte de que el derecho de revisión en los contratos de gestión de servicios públicos resulta ya de la declaración genérica de lo que se establece en el artículo 104.

Finalmente, a ese Título II del Libro II el Grupo Parlamentario Popular tiene una enmienda al artículo 169.2, la número 127, que nosotros entendemos que no debe tenerse en cuenta. El artículo 168 b), en relación con el artículo 170, ya fija suficientemente el alcance de la indemnización, sin que, por tanto, sea preciso remitirse en este artículo a la legislación de expropiación forzosa, cuya aplicación puede, incluso, inducir a confusión.

Al Título III el Grupo Parlamentario Popular tiene presentada la enmienda número 128. Entendemos nosotros que no ha lugar tampoco a la supresión de ese artículo toda vez que el precepto no altera el régimen general de la subasta y el concurso, sino que aclara la modificación introducida en la legislación de contratos del Estado, que sólo admitía el concurso para la adjudicación de este tipo de contratos. Al admitirse la subasta se precisa que en suministros sólo tendrá lugar en los de escasa cuantía en lo que estén perfectamente definidos los productos y, por tanto —y éste es el elemento decisivo—, el precio será el único factor determinante de la adjudicación.

La enmienda número 129, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 194 habla de la indemnización de daños y perjuicios. El precepto contiene una regla que constituye una excepción a la de la recíproca devolución de prestaciones y no prejuzga la procedencia de indemnización, que deberá ser resuelta por las normas generales según quién sea la parte causante de la resolución. Por otra parte, el artículo 98 del proyecto está dedicado a la indemnización de daños y perjuicios, que es también de aplicación a los contratos de suministros.

Tampoco aceptamos la enmienda número 130, del Grupo Popular, por las razones expuestas en otras enmiendas; concretamente, en la que mantiene al artículo 152.

En cuanto al Título IV, último de este proyecto, y por lo que se refiere a la enmienda número 149, del Grupo de *Convergència i Unió*, estamos en condiciones de llegar a una transaccional, que presentaremos en el Pleno. Asimismo, también mantenemos la esperanza de llegar a un acuerdo en el caso de la enmienda número 148; estudiaremos si también es posible llegar a una transaccional sobre esta enmienda.

Por lo que respecta a la 147, también del Grupo de *Convergència i Unió*, entendemos —y en este caso hay dudas, ya que no se ha debatido más este tema en la Ponencia— que está subsumida —se lo dejamos a su consideración— en la número 226, de nuestro Grupo. Por otro lado, quizá mantengamos un voto favorable a la número 146.

Con respecto a las enmiendas que restan de este Grupo, también mantenemos la esperanza de poder llegar a un acuerdo; lo estudiaremos en los días que faltan hasta el debate en el Pleno.

En cuanto a la enmienda 131, del Grupo Popular, no la vamos a aceptar por las razones que ya hemos expuesto al referirnos a la enmienda 128 al artículo 181.

Finalmente, vamos a estudiar las enmiendas del Grupo de *Convergència i Unió* referidas a la supresión de los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 217 y de los apartados 1, 2 y 3, del artículo 218, así como la enmienda 141, también relativa al Título IV del Libro II de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Antes de abrir el turno de portavoces, y aunque sólo sea a efectos de que podamos seguir el debate con propiedad, he de decir que por parte de los servicios de la Cámara se tratará de que mañana por la mañana tengan a su disposición el dictamen de la Comisión y trataremos también —aunque eso es algo más difícil— de que dispongan del conjunto de correcciones técnicas aportadas por el ponente del Grupo Socialista a lo largo de debate en Comisión.

En cualquier caso, les recuerdo que se han aportado tres enmiendas a esta Presidencia, que entiendo que se formulan por parte de la Ponencia. Una, relativa al artículo 21.4, que consiste en añadir después de: «... la Junta Consultiva de Contratación Administrativa...», lo siguiente: «... y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas...».

La segunda enmienda se refiere al artículo 25.3, para que tras: «... en el ámbito de la Administración General del Estado» se añada: «En el ámbito de las Administraciones de las Comunidades Autónomas dicha autorización será otorgada por los órganos competentes.»

Por último, se encuentra la enmienda que guarda relación con la número 160, del Grupo Parlamentario de *Convergència i Unió*, para que el apartado d) del artículo 30.3 adquiera la siguiente redacción: «Cuando se trate de la clasificación de empresas resultantes de escisión de sociedades o de la aportación de empresas.»

Por otra parte, si esta Presidencia no se equivoca, han sido aceptadas las enmiendas números 92, 95, 97, 105, 114 —con algún matiz—, 116, 118 y 119, así como las números 120, 121, 123, 124 y 153, con la sustitución de «penas» por «obras».

Entramos ahora en el turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora Boneta.

La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir muy brevemente, para indicar que la posición de nuestro Grupo, por coherencia —al menos, en lo que se refiere a Eusko Alkartasuna— con el veto que hemos planteado esta mañana, va a ser, si no de rechazo total, de abstención en la votación del informe de la Ponencia.

En todo caso, ya que antes no he tenido oportunidad de defender las enmiendas del Grupo Mixto, no voy a desnaturalizar este turno y simplemente diré que del conjunto del debate y del repaso de las enmiendas se desprende que deberían constar como retiradas las números 244 y 245.

En relación con la posición del resto de los Grupos, el nuestro se abstendrá, excepto en el caso de las enmiendas presentadas por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos relativas a la defensa de la reserva competencial de las Comunidades Autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

No sabe cuánto lamenta esta Presidencia que una cierta predisposición a ser inflexible con los horarios haya hecho decaer sus enmiendas. En cualquier caso, continuando con la aportación de esta mañana del Senador Cercós, es evidente que es usted una madre abadesa del debate en sede parlamentaria.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, Senador Galindo.

El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que el texto de la ley en su conjunto —dado que también ha emanado del Congreso— se ha desarrollado con el asentimiento de todas las fuerzas políticas. Creo que este texto era necesario para nuestro país; fundamentalmente, para las Administraciones públicas porque, entre otras cosas, existen estados casi de indefensión, tanto de las Administraciones públicas en el contexto de la contratación como también en los vínculos que mantienen las empresas privadas con las contrataciones públicas.

Por tanto, nuestro Grupo va a apoyar el texto en su integridad. Está claro que las aportaciones del conjunto de las fuerzas políticas han enriquecido más el texto y también diría que la extraordinaria predisposición y la gran voluntad en este caso de los compañeros socialistas, al aceptar enmiendas importantes. No es que hayamos cambiado el conjunto de la ley, pero creo que las aportaciones han sido de una riqueza y una valía tal que enriquecen enormemente el proyecto. A pesar de que se hayan aceptado muy pocas de las enmiendas que teníamos presentadas —aunque se han transaccionado algunas—, repito que este texto

es fundamental, y lo más importante ha sido la buena voluntad del conjunto de las fuerzas políticas basada, fundamentalmente, en la responsabilidad de todos y cada uno de los grupos que estamos representados en esta Comisión.

Insisto, pues, en que nuestro voto será favorable y que apoyaremos las enmiendas en función de que no se distorsione el texto que se propone.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos está ausente por tener otras obligaciones.

En consecuencia, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, Senador Codina.

El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, después del debate de esta tarde, en nombre de mi Grupo no puedo decir que me sienta satisfecho. De 30 enmiendas, se nos ha aceptado una transaccional y se ha anunciado que se aprobaría una, a pesar de que, recogiendo la voluntad expresada por el representante del Grupo Socialista, aún me queda la esperanza —desde este momento, hasta el debate en Pleno— de que podamos llegar a mayores acuerdos. Si no fuera así, realmente nos sentiríamos muy poco satisfechos.

Dicho esto, y en referencia a las otras enmiendas, habida cuenta de cómo se ha producido el debate de esta Comisión, de que no vamos a votar las enmiendas hoy, sino en el Pleno, y que lo que se hará hoy será votar simplemente el informe de la Ponencia, a la espera de los acuerdos a los que podamos llegar en el conjunto de las enmiendas que nos quedan pendientes, manifestaremos nuestra posición el día del Pleno, ya que hoy me parecería inadecuado posicionarme sin conocer exactamente cuál es el resultado de la negociación.

Por tanto, señor Presidente, sólo me queda anunciar el voto favorable al informe, como he dicho al principio de la tarde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Álvarez.

El señor ÁLVAREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi grupo se va a abstener en la votación del Informe de la Ponencia, puesto que, a pesar de que consideramos un avance importante este proyecto de ley en todo lo que es el régimen de contratación pública, después de comprobar en las exposiciones de los señores portavoces del Grupo Parlamentario Socialista las enmiendas que se nos aceptan y aquellas que no son aceptadas, seguimos viendo que quedan lagunas importantes en esta reglamentación, como es el ámbito de aplicación de la ley, lo cual nos parece importantísimo. El artículo 1.3 deja todavía abierta la posibilidad de que algunos contratos de entes instrumentales creados

con fondos públicos no sean regulados perfectamente por el articulado de esta ley, y la creación de estos entes instrumentales viene permitida por la aprobación en el año 1988, no muy lejana en el tiempo, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que permitía, y permite, crear una serie de entes públicos de carácter instrumental que pueden quedar sometidos indistintamente, tanto en su organización como en su actividad, al Derecho público o al privado.

Precisamente han sido esas entidades de carácter instrumental las que han permitido crear un clima de escasa confianza, por decirlo en términos suaves, en lo que se refiere a la administración de los caudales públicos en diversas esferas. Ese clima se ha traducido en una realidad triste para este país en los últimos tiempos, y nosotros entendemos que nuestra enmienda número 86 rectificaría esto convenientemente, dando lugar a que quedaran todas las entidades dependientes de las Administraciones públicas totalmente sujetas a la regulación de esta ley. Como no es así, nosotros vamos a abstenernos en la votación del Informe, y le aclararé, señor Cercós, que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular número 89 al artículo 4, relativa a los derechos de los contratistas que han de ser irrenunciables, obviamente, quedará supeditada a lo que ocurra con el artículo 116, punto 2, letra c).

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
El Senador Cercós tiene la palabra.

El señor CERCÓS PÉREZ: Gracias, señor Presidente.

Por nuestra parte, agradecemos las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado y el esfuerzo que está haciendo la Ponencia para seguir trillando un texto trilladísimo con aspectos que a todos nos interesan. Esta ley de contratos de las Administraciones Públicas tiene que servir durante muchos años a la sociedad española, igual que la que estamos cambiando; que no haya que modificarla mañana, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para que sea una ley para todos los españoles para mucho tiempo, pero además para poner a las empresas españolas en la Unión Europea. Ésa es la responsabilidad de todos los parlamentarios, y en particular del Grupo Parlamentario Socialista.

Queremos aclarar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la enmienda al artículo 1.3, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que esta ley sea el instrumento para que no vuelva a haber irregularidades dolorosas de ningún tipo para la clase política, para el pueblo español y para nuestro propio grupo, porque, hagamos la ley que hagamos, siempre habrá personas que individualmente nos avergonzarán, en nuestro caso, particularmente, que nos causan indignación y cuyo destino final será el que los tribunales decidan y resuelvan. Por ello, compartimos el espíritu de sus señorías para llegar a una ley de contratos que haga muy difícil a cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier época, poder transgredir las reglas éticas de trabajo

en el área de la contratación, en pro de una sociedad mucho más justa, más limpia, más saneada y con mejores expectativas también en su presencia en la Comunidad Europea.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.

Quiero decirles dos cosas con toda brevedad, quizá tres, para no alargar la reanudación de la sesión. La primera es manifestar, haciéndome eco de las palabras del Senador Cercós, que las cosas son como son y que la condición humana está presente en la más noble de las actividades, como es la política, pero créanme ustedes que si pudiéramos trasladar el trabajo que han desarrollado y el tono del debate al conjunto de los ciudadanos, se reforzaría enormemente la confianza en el conjunto de los servidores públicos para la representación de los intereses de los ciudadanos.

La segunda es encarecerle que, en el tiempo que debe transcurrir hasta el Pleno, se realice ese esfuerzo de aproximación. Me permitirá el Senador Cercós que le encarezca particularmente su atención también sobre las enmiendas que han decaído, porque me parece que es un intento en el que podemos trabajar. En cualquier caso, les pido que a las seis y media en punto estén aquí todos los miembros de la Comisión porque, de acuerdo con lo anunciado por la Presidencia, procederemos a la votación del informe.

El señor CODINA I CASTILLO: Señor Presidente, si me permite, habida cuenta de la composición de esta Comisión y tal como estamos en estos momentos representados los diferentes grupos, yo sugeriría que se celebrara ahora la votación, al margen de la citación hecha por la Presidencia.

El señor PRESIDENTE: La verdad es que me pone su señoría en un apuro. Yo estaría completamente de acuerdo con usted, pero me veo en la obligación de recordarle que no están presentes el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene usted toda la razón en lo que a la práctica se refiere, pero estoy convencido de que compartimos todos el afán de protección de las minorías que está en la raíz de nuestro trabajo.

Así es que, lamentablemente, no puedo acceder a su petición.

Se suspende la sesión hasta las seis y media de la tarde.
(Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Tal como acordamos, vamos a proceder a la votación del informe de la Ponencia del proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con las modificaciones producidas en la misma por la aceptación por los ponentes de diversas enmiendas, así como por la introducción de las tres enmiendas que conocen sus señorías.

Asimismo, se entienden incorporadas al informe —que pasaría, en su caso, a ser dictamen de la comisión— las co-

rrecciones técnicas a las que nos hemos referido a lo largo del desarrollo de la sesión de la tarde.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia, que pasa a ser dictamen de la Comisión.

Pregunto a sus señorías quién presentará el dictamen de la Comisión ante el Pleno de la Cámara. *(Pausa.—Varios señores Senadores: ¡El Senador Cercós!—Risas.)*

El señor CERCÓS PÉREZ: Que sea el Presidente de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: ¿Me permite hacerle una transaccional, Senador Cercós? Que sea el Vicepresidente de la Comisión.

El señor CERCÓS PÉREZ: Pues muy bien, que sea el Vicepresidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Así queda acordado. Nos repartiremos la tarea. *(Risas.)*

Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a los servicios de la Cámara.

Se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y treinta y cinco minutos.

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid

Depósito legal: M. 12.580 - 1961